



EUSKO ALDERDI JELTZALEA
PARTIDO NACIONALISTA VASCO

EUSKAL TALDEA
GRUPO VASCO

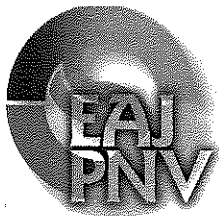
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del **debate de política general en torno al estado de la Nación**, las siguientes **Propuestas de Resolución**.

Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2011

EL PORTAVOZ

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 1

SECTOR FERROVIARIO

El ferrocarril es un modo de transporte esencial en la sociedad actual, seguro y eficaz en el consumo energético. Conviene, por ello, potenciarlo, favoreciendo su desarrollo y atribuyéndole una misión de mayor entidad en la sociedad y en la actividad económica.

Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, se abre a la competencia la prestación del servicio de transporte de mercancías por ferrocarril y paulatinamente se ha permitido el acceso de nuevas empresas ferroviarias. Ese mismo espíritu se reservaba en la Ley para el transporte de viajeros. Sin embargo, en este caso, no ocurre lo mismo, encontrándonos con un monopolio por parte de RENFE que teóricamente iba a ser transitorio.

Han pasado muchos años, y de hecho se han producido traspasos competenciales en el servicio de cercanías a alguna comunidad autónoma. Es importante que la gestión de los recursos, sobre todo en el contexto económico en que nos encontramos, sea la mejor posible y la competencia en el sector puede contribuir a ello. Así mismo, urge proveer de los instrumentos políticos necesarios para una correcta gestión a aquellas comunidades autónomas que vayan asumiendo los servicios de cercanías.

En consecuencia se presenta la siguiente propuesta de resolución:

El Gobierno presentará en el plazo de un mes un proyecto de ley y adoptará las medidas necesarias, para reformar la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario y su reglamento, de manera que entre otras medidas se suprima la Disposición Transitoria tercera, posibilitando la circulación por las líneas generales de otros operadores diferentes a Renfe, y efectuándose así una liberalización del tráfico de viajeros, al menos en los servicios regionales y de cercanías.

Se contemplará así mismo que las infraestructuras de las líneas de interés estrictamente local y con servicios de cercanías o regionales, tanto de ancho ibérico como de ancho métrico puedan excluirse de la red ferroviaria de interés general y en su caso, ser transferidas a la comunidad autónoma.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 2

FONDO DE CAPITALIZACIÓN

En febrero de 2010, el Gobierno presentó el documento «Líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social», en el cual proponía una serie de actuaciones para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo español. Y entre las actuaciones que tenían por finalidad fomentar el uso de la contratación indefinida se preveía abrir un «debate sobre las condiciones y los posibles resultados que podrían derivarse de la adaptación a nuestro país de fórmulas que en los últimos años se han adoptado con éxito en algunos países europeos que permitan fomentar la movilidad y la formación, y refuercen el aliciente de las empresas a su utilización y a incrementar la estabilidad en el empleo».

Este párrafo del documento presentado por el Gobierno español se refiere a la posibilidad de trasladar el modelo de indemnizaciones por despido implantado en Austria en el año 2002, lo cual se tradujo finalmente en la creación de un Fondo de Capitalización en los términos previstos en la Disposición adicional 10ª de la Ley 35/2010.

Por una parte, la Disposición adicional 10ª establece que la constitución del Fondo de Capitalización no supondrá un incremento de las cotizaciones empresariales y por otra se prevé que el trabajador podrá hacer efectivas las cantidades acumuladas en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

El pasado 18 de Junio venció el plazo legislativo establecido para que se aprobara el proyecto por parte del Consejo de Ministros. Considerando necesario el instrumento previsto e instando al cumplimiento de la legislación, se presenta la siguiente:

Propuesta de resolución

El Gobierno procederá de inmediato al desarrollo de la DA 10ª de la Ley 35/2010 de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, para la dotación, organización y funcionamiento del Fondo de capitalización previsto en dicha DA presentando en el plazo de un mes el correspondiente Proyecto de Ley.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 3

ATOTXA-TABAKALERA

La ubicación de la estación del TAV en Atotxa, de San Sebastián, y el desarrollo en terrenos adyacentes de otros dos proyectos, el proyecto del Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera y el proyecto de ubicación en la zona de una estación de autobuses o bien suponen un gran riesgo, en la medida en la que cada uno de los proyectos se desarrolle de forma separada, o bien una oportunidad de crear un nuevo espacio integrado y una nueva centralidad urbana en Donostia.

En la actualidad existe una gran preocupación tanto por el retraso como por que se pudieran estar manejando soluciones técnicas para las instalaciones del TAV que no garantizan una adecuada coordinación con los otros dos proyectos, y en particular con el de Tabakalera.

El 15 de febrero de 2011 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley al respecto, sobre el que, tras las elecciones forales y municipales recientemente celebradas, es necesario insistir con el fin de no llegar tarde a la solución necesaria.

Por todo lo anterior el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

- 1-. De conformidad con lo anunciado en su día por ADIF, este convoque en el plazo de 3 meses el concurso internacional de ideas para que la remodelación de la estación del tren de alta velocidad de Atotxa de San Sebastián se adecue a los desarrollos previstos de la estación de autobuses y al proyecto de Tabakalera de manera que se cree, entre todos, un único espacio integrado, que si fuera el caso pudiera ser soterrado.
- 2-. Convoque de inmediato, de forma previa al lanzamiento de dicho Concurso, la Comisión Interinstitucional correspondiente a la citada estación de alta velocidad para analizar, coordinar e complementar este proyecto con los proyectos de Tabakalera y la estación de autobuses de San Sebastián.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 4

INVERSIÓN EN I+D+i

La actual crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo productivo. Esta idea ha sido defendida por el Gobierno en numerosas ocasiones. Sin ir más lejos, el Presidente del Gobierno ha hecho referencia a ello en el Discurso de presentación del Debate sobre el Estado de la Nación. Dicho cambio de modelo productivo, que ha de tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, requiere consolidar uno de los pilares fundamentales de ese nuevo modelo productivo, como es la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

Priorizar la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado e impulsar la aplicación de los nuevos instrumentos creados por las Leyes 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con vistas a mejorar la posición competitiva del sistema productivo español, logrando un crecimiento inteligente y sostenible, basado en el conocimiento y la innovación.

Se insta, en concreto, al Gobierno a que los compromisos presupuestarios dedicados a la I+D+i que el Presupuesto General del Estado para el año 2012 recoja en los capítulos 7 y 8 de los diversos programas de los Ministerios de Ciencia e Innovación, Educación e Industria, Turismo y Comercio sean equivalentes, como mínimo, bien en sus cifras absolutas, bien en las cifras porcentuales respecto a los presupuestos globales de dichos ministerios, a los que figuraron en dichos capítulos, de esos mismos Ministerios en los Presupuestos que resultaron aprobados por el Parlamento para el año 2011.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 5

FONDOS FINANCIEROS ESTRATÉGICOS

Los Centros de Investigación de mayor reconocimiento basan su éxito, entre otros elementos, en su estabilidad financiera a largo plazo, limitando su dependencia de las dotaciones anuales procedentes de los poderes públicos. Lograr centros de investigación competitivos en el ámbito internacional exige que puedan dotarse de Fondos Financieros Estratégicos (Endowment) pudiendo nutrir sus presupuestos anuales, parcialmente, de los rendimientos de esos Fondos y pudiendo disponer de parte de los mismos cuando quieran realizar apuestas estratégicas que requieren disponibilidades financieras que no les pueden ser aportadas por las Instituciones Públicas.

En este sentido, se trata de garantizar que, cuando en un Centro de Investigación se logra que Patronos privados realicen aportaciones económicas, éstas puedan ser destinadas, en la parte no ejecutada, a engrosar el Fondo Estratégico.

En este sentido, algunos tratan de mantener que esos recursos deben ser considerados como financiación de las actividades del Centro, lo que significa que, cuando no se ejecuta todo el Presupuesto en la anualidad, en aplicación de la normativa de subvenciones, nos encontraríamos ante un supuesto de sobrefinanciación, que exigiría devolver el remanente a las Administraciones Públicas. Se instaura, así, una concepción "subsidiaria" de las Administraciones Públicas. Y, lo que es peor, ahuyenta a los privados de la financiación de centros de investigación de colaboración público-privado, pues los privados no están dispuestos a que su inversión sea para que las Administraciones Públicas ahorren en sus aportaciones.

Por todo lo anterior el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. A estudiar, e implementar en esta Legislatura la forma en la que los Centros de Investigación con personalidad jurídica propia, en los que participen personas físicas o jurídicas privadas en calidad de Fundadores, Patronos u otras figuras similares, puedan instituir un Fondo Financiero Estratégico (Endowment), destinado a garantizar su estabilidad financiera a largo plazo.
2. A que la dotación del Fondo Estratégico (Endowment) pueda realizarse con las aportaciones recibidas directamente con ese destino. También puedan destinarse a integrar el Fondo Estratégico (Endowment) los



EUSKO ALDERDI JELTZALEA
PARTIDO NACIONALISTA VASCO

EUSKAL TALDEA
GRUPO VASCO

recursos presupuestarios no ejecutados en la correspondiente anualidad, siempre que la cantidad así destinada no supere la aportada en conjunto por las personas físicas o jurídicas privadas en la misma anualidad.

3. A que, en relación con lo previsto en el número anterior, cuando en un Centro de Investigación participen personas privadas junto a Administraciones Públicas en la condición de Fundadores, Patronos u otras figuras similares, las aportaciones económicas realizadas de forma incondicionada por los privados no tengan, a los efectos de la normativa de subvenciones, la consideración de recursos destinados a la financiación de las actividades del Centro.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 6

CORREDOR FERROVIARIO ATLÁNTICO

El pasado 12 de abril de 2011 fue aprobada por unanimidad, en el Pleno de la Cámara y a instancia del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV una Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los planes del Gobierno en torno al Corredor Ferroviario Atlántico.

Dada la trascendencia del tema, y a la vista del calendario político en el que deben implementarse las decisiones acordadas en la citada moción, el Congreso de los Diputados **el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:**

1. Elaborar y presentar en el Congreso de los Diputados, antes del 15 de septiembre de 2011, el Plan técnico y de actuación del Corredor Ferroviario Atlántico, tanto para mercancías como para viajeros, en términos análogos al que el Ministerio de Fomento presentó en fechas recientes en torno al Corredor Ferroviario Mediterráneo.
2. Se sume de inmediato a la firma del Manifiesto del Corredor Ferroviario Atlántico de mercancías, promovido por el Gobierno Vasco.
3. En el marco del Plan Global técnico y de actuación del Corredor Ferroviario Atlántico elabore, asimismo, antes del 15 septiembre de 2011, un Plan de adaptación al ancho de vía europeo de la red ferroviaria convencional actual en el tramo Irún-Bilbao-Vitoria para su ejecución prioritaria en función de las disponibilidades presupuestarias, iniciándose en todo caso la misma en el ejercicio presupuestario de 2012.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 7

CLARIDAD Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

La claridad y transparencia presupuestaria constituye un elemento básico tanto de su eficacia como de su valor democrático.

No existe razón alguna para que el Presupuesto del Ministerio de Defensa no se plantee, al respecto, con claridad y transparencia equiparables a lo que ocurre en otros Ministerios.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A que, de forma previa a la presentación de sus Presupuestos para el año 2012, remita al Parlamento un documento en el que recoja con precisión, claridad y detalle las cifras reales que el Ministerio de Defensa tiene ya comprometidos, de ejercicios anteriores, bien sea con organismos y/o empresas privadas y públicas, bien sea con Ministerios, como el de Industria, sea por causa de adquisición de armamento sea por causa de financiación de apoyo a la investigación, desarrollo o innovación en el campo militar.
2. A que en el Presupuesto 2012 del Ministerio de Defensa figuren, con precisión y detalle, tales compromisos presupuestarios adquiridos, al igual que los importes de las cantidades que dicho Ministerio pretenda comprometer en el Ejercicio 2012.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 8

INVERSIONES EN EL AEROPUERTO DE BILBAO.

En Febrero de 2009, la entonces Ministra de Fomento Magdalena Álvarez anunció una inversión de alrededor de 80 millones de euros para el Aeropuerto de Bilbao. La Nota Informativa que el propio Ministerio hizo pública en aquella ocasión incluye un detalle de las obras que se iban a realizar y los plazos de ejecución de las mismas, terminando en el año 2014.

Entre los proyectos a realizar se contemplaba la ampliación del edificio terminal de viajeros, que aumentaría la superficie del actual edificio en 25mil metros cuadrados y permitiría ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los ocho millones de pasajeros al año.

Dos años y medio más tarde, dichas obras no se han acometido, el Gobierno no parece tener un proyecto claro al respecto, de forma que las informaciones que nos llegan no son claras ni concisas.

El Proyecto anunciado en 2009 ha sufrido retrasos debido a los ajustes económicos realizados por el Gobierno y no existe un calendario de ejecución de las inversiones previstas para el aeropuerto que asegure, por otra parte, el creciente número de usuarios de dicho aeropuerto.

Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. 1-. Que, de forma previa a la presentación en el Congreso del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, defina con precisión el monto y la secuencia temporal de las inversiones a llevar a cabo en el Aeropuerto de Loiu con el objetivo de proceder a la ampliación del edificio terminal de pasajeros adecuándolo a las previsiones de tráfico de viajeros para los próximos años. Y lo haga en el marco del Proyecto, ya anunciado y definido anteriormente por el Ministerio de Fomento, de ampliación del edificio terminal de pasajeros de dicho aeropuerto.
2. 2-. Que los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recojan las inversiones a desarrollar, tanto en el año 2012 como en los siguientes, mediante los oportunos compromisos plurianuales, las inversiones que se deriven de la adecuación de dicho Proyecto.



EUSKO ALDERDI JELTZALEA
PARTIDO NACIONALISTA VASCO

EUSKAL TALDEA
GRUPO VASCO

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº

81

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 9

PENSIÓN DE VIUDEDAD

En relación a la pensión de viudedad, el requerimiento de suficiencia de la cuantía de protección de esta contingencia obliga a incrementar el porcentaje de cálculo para determinar su pensión hasta el 70% de las rentas, retribuciones o pensión del cónyuge o pareja de hecho fallecido. Cualquier otra alternativa provocaría la desnaturalización del carácter contributivo de dicha prestación. En la protección de esta contingencia resulta mucho más relevante establecer un justo y equitativo régimen de incompatibilidades con otras rentas o prestaciones.

Por lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proteger la contingencia de viudedad aplicando el 70% a la renta, retribución o pensión del cónyuge o pareja de hecho fallecida, siempre que esta prestación fuera la única fuente de ingresos de la persona beneficiaria de la pensión de viudedad.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 10

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL TC SOBRE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE CRÉDITO, BANCA Y SEGUROS

Considerando que las Comunidades Autónomas, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, han asumido competencia exclusiva en materia de Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, así como competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del crédito, banca y seguros, sin perjuicio de la reserva al Estado de la competencia exclusiva en materia mercantil, sobre las bases de la citada ordenación, así como en lo que atañe a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; no obstante, aún no se han corregido sendas vulneraciones del bloque de constitucionalidad, ya constatadas por la doctrina contenida, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Constitucional 96/1996 y 235/1999, por las que se encomendó al legislador estatal realizar las modificaciones pertinentes en la legislación vigente para dar entrada a las competencias autonómicas.

Considerando que la equiparación que el Tribunal Constitucional ha realizado entre las Cajas de Ahorros y las Cooperativas de Crédito en orden a determinar el ámbito competencial que corresponde a las Comunidades Autónomas no ha sido trasladada a la legislación estatal, por lo que se han de asignar a la autoridad autonómica las competencias legislativas y de ejecución sobre las Cooperativas de Crédito, fijando el "domicilio social" como único punto de conexión, sin perjuicio de la competencia estatal para fijar las bases de la ordenación.

Considerando que la previsión introducida en el artículo 2.3 de la LORCA por el apartado uno del artículo 101 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, choca con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la propia LORCA y se aparta del espíritu que dio lugar a dicha norma, así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, negando al legislador autonómico la facultad de determinar el sistema de selección de consejeros generales que, garantizando la representatividad y el principio democrático, atienda de la mejor manera posible al grado de implantación o penetración de las Cajas de Ahorros en los distintos territorios y, en consecuencia, permita la mejor representación de los genuinos intereses de las zonas en las que operan.

Y considerando, además, que hace cinco años esta Cámara aprobó con el voto favorable incluso del Grupo Socialista, una Resolución al respecto, por la que se instaba al Gobierno a cumplir las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre competencias autonómicas en materia de crédito, banca y seguros en el que se señalaba literalmente que: "El Congreso de



EUSKO ALDERDI JELTZALEA
PARTIDO NACIONALISTA VASCO

EUSKAL TALDEA
GRUPO VASCO

los Diputados insta al Gobierno a elaborar y presentar en esta Cámara en el plazo improrrogable de doce meses, un Proyecto de Ley al objeto de cumplir la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en las Sentencias 96/1996 y 235/1999 y, a tal efecto, atribuir a las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas las potestades de desarrollo normativo y de ejecución de la legislación básica estatal”.

Por consiguiente presenta la siguiente Propuesta de Resolución;

Pasados ya todos los plazos habidos y por haber, el Congreso insta de nuevo al Gobierno a:

- Aprobar en el Congreso de los Diputados, en el plazo improrrogable de cuatro meses, y en todo caso, antes de que finalice el presente año, una Ley al objeto de cumplir la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en las Sentencias 96/1996 y 235/1999.
- Atribuir a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, fijando para su ejercicio las normas de conflicto o conexión necesarias, las potestades de desarrollo legislativo y ejecución respecto a las entidades de Bancos Privados, Establecimientos Financieros de Crédito, Entidades de Dinero Electrónico y Sociedades de Garantía Recíproca
- Establecer como único punto de conexión para distribuir competencias respecto a las Cooperativas de Crédito su domicilio social, por razón de su equiparación con las Cajas de Ahorros fijada en las Sentencias 96/1996, 86/1992 y 87/1993
- Suprimir el apartado 2.3 de la LORCA para respetar la competencia exclusiva autonómica en cuanto al sistema de elección de los consejeros generales de las Cajas de Ahorros.”



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 11

ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE GAS NATURAL

Para afianzar la continuidad y la seguridad del suministro del sistema gasista español debe disponerse de unas existencias de acceso seguro en cantidad suficiente. Dada nuestra carencia de yacimientos de gas natural en el territorio nacional, ni en los entornos europeos próximos, para atender fallos de suministro no existe otro procedimiento que disponer de almacenamientos previamente constituidos o afectar a la atención de la demanda.

La Ley del Sector de Hidrocarburos, en su primera redacción del año 1998, establecía en **treinta y cinco días** de las ventas medias anuales la obligación de almacenamiento de existencias mínimas de seguridad de los comercializadores, facultando al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MITyC) para aumentar la cuantía de esa obligación **hasta sesenta días** en función de las disponibilidades.

Posteriormente, dada la imposibilidad material de cumplimiento de la citada Ley y para adecuarse a la capacidad real disponible en los actuales almacenamientos subterráneos, se redujeron y fijaron estas existencias en **diez días permanentes** con carácter estratégico, mas **ocho días como valor medio durante el mes de octubre**, disponibles para su utilización a lo largo del resto del año. Esta capacidad de almacenamiento **es claramente insuficiente** para hacer frente a episodios de interrupciones parciales de suministro derivados de problemas técnicos en los puntos de origen, o a problemas socio-políticos y geo-estratégicos en alguno de los países proveedores (como se han producido caso de Rusia en disputa con Ucrania o se están produciendo caso Norte África Libia etc., Oriente Medio Barheim Kuwait etc.), que pueden afectar a intereses comerciales de muy diversos actores, perturbando al resto del mercado, y por tanto, pudiendo influir en la capacidad general de transporte marítimo o en los precios de la materia prima y de los fletes, y que al final generara problemáticas no deseadas en el sector de los Consumidores, y en especial a la Industria.

En este sentido algo se esta avanzando con la inclusión de nuevos almacenamientos subterráneos como Yela, Marismas, Castor o la ampliación de Gaviota, aunque no son suficientes para afrontar una crisis.

Como referencia, las actuales capacidades de almacenamiento subterráneo de gas son en **Alemania de 93 días de consumo**, en **Francia de 101 días de consumo**, y en **Italia de 74 días de consumo**, con capacidades de extracción superiores al consumo diario en todos ellos.



La normativa debe recuperar el establecimiento de los **treinta y cinco días de existencias mínimas de seguridad con carácter estratégico establecido inicialmente en la Ley**, manteniendo los 10 días de carácter temporal como operativas de flexibilidad, y aun así con dicho incremento el ratio de reservas de seguridad en relación demanda media seguirá siendo inferior a la Europea 16% (Real actual) frente a 13% (futuro) y sin considerar el crecimiento permanente a este respecto de Europa, por ello sería conveniente incluso avanzar progresivamente en el futuro hacia los sesenta días que se considero en su momento la Ley del Sector de Hidrocarburos como garantía frente a sucesos, lo que unido al resto de las funcionalidades, como son el contribuir al equilibrio estacional de precios, aportación a la modulación diaria, posibilitar la creación de mercados de gas, etc... permita fijar el dimensionamiento deseable de los almacenamientos subterráneos, tanto en lo referente a su capacidad de almacenamiento como a la necesaria capacidad de extracción, para un funcionamiento seguro del sistema gasista con la adecuada garantía.

Recordemos que en la matriz energética primaria, el gas natural ya supone un 25% de los consumos en un país que no dispone de yacimientos naturales propios. La responsabilidad del gas natural se acrecienta al considerar que este recurso energético es empleado a su vez para la generación de una cuarta parte de la energía eléctrica en grandes centrales, de aproximadamente un 10% adicional por medio de la cogeneración en procesos industriales de todo tipo, y que son un factor decisivo como respaldo de las energías renovables.

En los países europeos de nuestro entorno, no sólo disponen de una capacidad de almacenamiento claramente superior a la española, sino que continúan construyendo nuevos almacenamientos.

Por consiguiente presenta la siguiente **Propuesta de Resolución**;

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a Introducir en la Planificación de Infraestructuras del Sector del Gas Natural 2012-2020, actualmente en fase de redacción, los consolidación de los nuevos almacenamientos y/o ampliaciones de Yela, Marismas, Gaviota y Castor , al objeto de aumentar tanto la capacidad de almacenamiento como la necesaria capacidad de extracción, para un funcionamiento seguro del sistema gasista con la adecuada garantía, así como avanzar en la el aumento de la capacidad obligatoria de Existencias Mínimas de Seguridad y Reservas Estratégicas, acordes con el entorno europeo.

La Planificación puede recoger las ampliaciones mediante fases hasta alcanzar la capacidad máxima, iniciando ya las primeras fases de cada proyecto para finalizar las últimas fases que en el entorno del 2020, al objeto de acompañar el desarrollo de infraestructuras con el sistema tarifario.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 12

MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA. DEFINICIÓN DE NUEVOS ESCALONES DE LA ALTA TENSIÓN ELÉCTRICA

Al objeto de de mejorar la eficiencia y competitividad de la pequeña y media empresa, base del tejido productivo, la cual permitirá ayudar a paliar parte de los efectos de la crisis económica y de la perdida de empleo, es necesario que uno de los factores que contribuyen en buena medida a esa perdida o mejora de competitividad se adecuen a la realidad y necesidades de la Industria, como son los costes energéticos.

Dentro de esos costes energéticos se encuentran los niveles de tensión a los que la industria esta conectada y que muchas veces por cuestiones ajenas a las mismas, como es la historia del desarrollo de las redes en España avocarón a muchas Industrias a conexiones en su momento adecuadas en niveles de tensión de transporte secundario que hoy en día en cambio se consideran de baja tensión unicamente por reglas reglamentarias, cuando en realidad lo son de alta tensión por la función de transporte que ejercen las líneas de conexión, y por tanto influyen de manera desfavorable en las tarifas de acceso a redes de la industria y por tanto en la competitividad de la industria, al afectar a un vector tan importante como es el coste energético..

Dependiendo de los territorios por ejemplo el nivel de 30 kV no tiene la misma función que otras redes de media tensión (como p.e. 20 kV), sino que realiza una función de sub-transporte similar a la que hacen las redes de 45 o 66 kV en otros territorios, ya que de hecho, alimenta mediante subestaciones 30/13 a una red media tensión de 13 kV. Por ello y con objeto de avanzar hacia una mejor asignación de costes para los clientes conectados a la misma, es decir mediana empresa y la mejora de su competitividad, debe modificarse el rango de la tarifa de acceso de la alta tensión para que englobe aquel nivel de tensión que ejerza la función de sub- transporte o transporte secundario, ya que de otro modo, el considerarles dentro de la tarifa de baja tensión implica el mismo tratamiento que a clientes en redes de tensiones inferiores con funciones diferentes y por tanto supone una perdida de eficiencia y de competitividad de la pequeña y media empresa.

La definición normalizada de la alta tensión varía de los 30 kV. a los 72,5 kV y la muy alta tensión de los 72, 5 kV a los 400 kv



EUSKO ALDERDI JELTZALEA
PARTIDO NACIONALISTA VASCO

EUSKAL TALDEA
GRUPO VASCO

Por consiguiente presenta la siguiente **Propuesta de Resolución;**

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la normativa correspondiente donde se establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica de forma que se reduzca el nivel de tensión definido para la tarifa de acceso de la alta tensión y que englobe aquel nivel de tensión que ejerza la función de sub- transporte o transporte secundario.



EUSKO ALDERDI JELTZALEA
PARTIDO NACIONALISTA VASCO

EUSKAL TALDEA
GRUPO VASCO

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº

SS

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 13

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

En relación a los menores extranjeros que deben ser acogidos por la red de servicios sociales de las Comunidades Autónomas o Instituciones Forales, se observa la existencia de una manifiesta desproporción entre los que son acogidos por una u otras comunidades y se observa así mismo, el incumplimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y de su protocolo de aplicación, en relación a la edad de estos menores muchas veces falsificadas particularmente por los que presentan documentos de identificación enviados por correo desde sus países de origen.

Por consiguiente presenta la siguiente Propuesta de Resolución;

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para que el contingente de menores acogidos por los Servicios Sociales sea proporcional al número de habitantes de la Comunidad Autónoma o Territorio Foral y a establecer criterios uniformes por parte del Ministerio Fiscal a efectos de una determinación exacta de la condición de menor invocada cuando la apariencia física ofrece dudas.



EUSKO ALDERDI JELTZALEA
PARTIDO NACIONALISTA VASCO

EUSKAL TALDEA
GRUPO VASCO

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº

56

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 14

MÁQUINAS HERRAMIENTA

La máquina-herramienta a través de sus soluciones y equipos está en el origen de toda actividad industrial. No existe producto fabricado de manera industrial en cuyo proceso no intervenga directa o indirectamente la máquina-herramienta.

Los sectores industriales tractores (automoción, generación de energía, aeronáutica, ferrocarril, bienes de equipo, etc.) confían su capacidad productiva y la implementación de gran parte de sus innovaciones al sector de máquina-herramienta que les permite incorporar mayor productividad, trabajar con nuevos materiales, con mayores precisiones y eficiencia. Se trata de un sector que incide de manera decisiva en la competitividad de los principales sectores productivos, y por tanto, de la economía en su conjunto.

Es una realidad incuestionable que la práctica totalidad de los países industrialmente avanzados se preocupan de contar con un sector de máquina-herramienta fuerte, y unos sectores tractores como los anteriormente citados equipados con máquinas de última generación. Sin esta combinación sería impensable contar con una industria competitiva y capaz de fabricar productos de alto valor añadido.

El sector, tras tres años difíciles en el periodo 2002-2004, ha contado con cuatro años posteriores de crecimiento consecutivos, que se han visto frenados por la actual situación de crisis económica. Este significativo cambio de tendencia ha afectado, y sigue afectando especialmente al mercado nacional hoy por debajo, en lo que a la demanda se refiere a los niveles mínimos que se conocieron en la crisis del año 1992.

Por consiguiente presenta la siguiente Propuesta de Resolución;

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en coordinación con la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-Herramienta (AFM) un PLAN de INCENTIVACIÓN de la inversión productiva y la renovación del parque de MÁQUINAS-HERRAMIENTA estableciendo medidas dirigidas a la incentivación de la demanda de máquinas herramienta, mediante ayudas directas a la compra de estos equipamientos por parte de las PYMES industriales, estableciéndose una subvención al comprador de hasta el 25% del valor total, compatible con desgravaciones fiscales a la inversión en equipos productivos.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 15

FLEXIBILIDAD ICO PARA RESPONDER A LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES.

La falta de crédito y financiación de las pymes y autónomos es una de las consecuencias de la crisis económica que genera graves problemas en el funcionamiento de dichas empresas, tanto por las necesidades apremiantes de circulante como de financiación de inversiones.

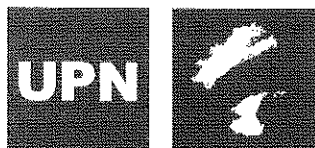
Las entidades financieras restringen el crédito a pymes y autónomos, no quieren correr ningún riesgo en materia de solvencia e impagos. Por ello, es preciso que las instituciones públicas faciliten, en la medida de lo posible, la financiación a estas pequeñas y medianas empresas, y contribuyan a la salida efectiva de la crisis.

El Instituto de Crédito Oficial es un instrumento adecuado para tal fin. Sin embargo, algunas de sus líneas operativas necesitan ciertos cambios para ajustarse de mejor manera a los requerimientos y a la situación de las pymes.

Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- **Ajustar o corregir la línea ICO correspondiente, transformando las cuotas de crédito actuales a 3 años y con 1 de carencia en préstamos a 5 años sin carencia. Es, además, preciso que dicha línea incluya también las operaciones cuyo importe esté situado entre 0 y 200.000 €.**

A efectos de tramitar con mayor agilidad las solicitudes, sería oportuno que las Sociedades de Garantía Recíproca las recepcionen, las analicen y adopten las decisiones pertinentes en relación a la gestión del riesgo.



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO
Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

Plaza Príncipe de Viana, 1 - tfo.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

58

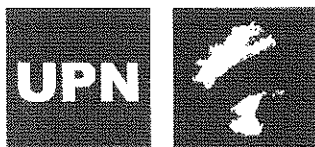
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado **D. Carlos SALVADOR ARMENDÁRIZ** de Unión del Pueblo Navarro (UPN) formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, la siguiente **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN** relativa a la definición del papel de las energías renovables, en especial de la solar fotovoltaica.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 29 de junio de 2011

D. Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra (UPN)

Portavoz G.P. Mixto



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

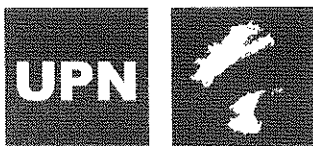
Plaza Príncipe de Viana, 1 - tffno.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

La política energética es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el crecimiento económico de cualquier país. Una buena política dinamiza el desarrollo y el progreso de una nación, de la misma manera que una mala, ralentiza y lastra al resto de sectores productivos.

La situación actual de los sectores afectados es de incertidumbre debido, en parte, al difícil contexto económico tanto nacional como internacional y, en parte, a la deficitaria gestión del Gobierno al regular de forma insuficiente y defectuosa esta materia. En concreto, en lo que se refiere a las energías renovables, y en especial a la solar fotovoltaica, la aprobación del Real Decreto 1003/2010 de 5 de agosto así como del Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre, han contribuido a generar una gran inseguridad jurídica y han provocado las dudas en los inversores nacionales e internacionales, que incluso han planteado demandas millonarias contra nuestro país por este motivo.

Solo en Navarra, más de 8.500 pequeñas instalaciones se verán afectadas por estas medidas retroactivas. La merma de ingresos que sufrirán los productores originará situaciones en las que no se podrán hacer frente a las obligaciones de pago contraídas, poniendo en grave riesgo el patrimonio personal expuesto como garantía.

Cabe recordar, que el sector productivo de las energías renovables en España tiene un reconocido prestigio internacional, ha posicionado a nuestro país como uno de los líderes mundiales en esta materia y ha coadyuvado a capear la crisis que nos azota no sólo con el mantenimiento del empleo sino generando nuevos empleos – más de 90.000 en a penas dos años.



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

Plaza Príncipe de Viana, 1 - tño.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

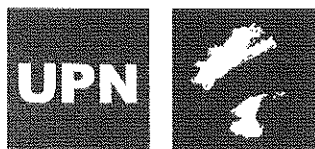
1.- Retome la iniciativa del diálogo para restaurar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica en materia energética, a través de la definición del mix energético y, en especial, del papel de las energías renovables dentro del mismo.

2.- Modifique el marco normativo al que se acogen los titulares de plantas solares fotovoltaicas existentes a través de la adecuación de:

- el Real Decreto 1003/2010 de 5 de agosto para impedir la suspensión cautelar del cobro de primas sin el preceptivo trámite de audiencia previo al interesado.

- lo establecido en el Real Decreto 1565/2010 con relación a la adaptación de las instalaciones a nuevas condiciones técnicas para que ésta pueda realizarse en condiciones técnico-económicas factibles.

- el Real Decreto-Ley 14/2010 para mantener la seguridad jurídica de las inversiones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuya rentabilidad o liquidez han resultado sustancialmente deterioradas, suspendiendo cautelarmente la aplicación de sus disposiciones adicional primera y transitoria segunda, en tanto en cuanto no se regule dicha aplicación con criterios objetivos entre energías y viables económicamente.



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO
Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

Plaza Príncipe de Viana, 1 - tfo.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

59

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado **D. Carlos SALVADOR ARMENDÁRIZ** de Unión del Pueblo Navarro (UPN) formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, la siguiente **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN** relativa a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 29 de junio de 2011

D. Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra (UPN)

Portavoz G.P. Mixto



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

Plaza Príncipe de Viana, 1 - tfo.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

La Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales se encuentra en vigor desde el pasado mes de febrero conforme con lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la propia Ley "La presente Ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»...." (BOE de 16 de noviembre de 2010).

Sin embargo, a fecha de la presentación de la presente iniciativa todavía no se ha dado cumplimiento al contenido de la misma que en su Disposición Adicional establece "La regulación de la organización y funcionamiento de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales se llevará a cabo por Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado".

En el contexto de la Unión Europea cabe citar que la Nueva Gobernanza Económica y Presupuestaria, la cual se encuentra en su fase última de tramitación, contempla en su marco dispositivo reforzar la transparencia del proceso presupuestario otorgando mandatos a oficinas presupuestarias nacionales independientes o a instituciones competentes en materia presupuestaria. Al respecto, el documento de Conclusiones del Consejo Europeo de los pasados días 23 y 24 de junio, que en su Primera Conclusión estima "que el semestre europeo se ha convertido en un método de gobierno eficaz para apoyar la formulación de políticas tanto de la UE como nacionales de forma integrada, transparente y oportuna".

A todo ello, se añade la especialidad del momento en el que nos encontramos, las serias dificultades que atraviesa la economía española, así como la, cada vez mayor, demanda de transparencia y control de las cuentas públicas por parte de los ciudadanos.



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

Plaza Príncipe de Viana, 1 - tño.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

“El Congreso de los Diputados ratifica la necesidad de poner en marcha de forma inmediata la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales en cumplimiento de la Ley 37/2010 de 15 de noviembre por la que se crea dicha Oficina, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional de la citada Ley así como incluyendo la dotación presupuestaria suficiente para el desempeño de sus funciones en el Presupuesto de las Cortes Generales, consiguiendo así una mayor transparencia de las cuentas públicas que redundará en la recuperación del prestigio por parte de las instituciones”.



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

Plaza Príncipe de Viana, 1 - tño.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

60

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado **D. Carlos SALVADOR ARMENDÁRIZ** de Unión del Pueblo Navarro (UPN) formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, la siguiente **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN** en materia de derechos y libertades públicas en País Vasco y Navarra.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 29 de junio de 2011

D. Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra (UPN)

Portavoz G.P. Mixto



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

Plaza Príncipe de Viana, 1 - tfo.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

Resulta del todo punto contradictorio e injusto para los miles de ciudadanos vascos y navarros que tuvieron que abandonar su tierra natal o de acogida debido a la presión y el chantaje mafioso de la banda terrorista Eta que tengan que asistir a la irrupción de Bildu así como a la ocupación de espacios públicos y políticos por grupos afines al terrorismo de Eta.

En el País vasco y Navarra se da una circunstancia absolutamente perversa y excepcional que no tiene parangón en Europa,: quienes apoyaron durante muchos años la táctica de extorsión e intimidación social de la banda terrorista Eta, vuelven a hacer política sin restricciones aparentes, beneficiándose de la falta de concurrencia, de la exclusión de los censos electorales del País Vasco y Navarra de todos aquellos ciudadanos (miles) que tuvieron que buscar un lugar distinto, alejado fuera del alcance de quienes les perseguían.

La vinculación de Bildu y Eta, corresponde probarla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no podemos tolerar con indiferencia, que quienes políticamente han sido el sostén del terror y lo han apoyado durante décadas puedan beneficiarse además de la ausencia obligada de muchos ciudadanos que, por obligación y muy a su pesar, hoy no pueden ejercer su derecho a voto allí donde realmente debiera ejercerse, en su tierra, por una regulación de la LOREG que debiera acoger una solución posibilista a todos aquellos ciudadanos españoles –vascos y navarros- que, sin perder su actual y obligado anonimato les permita ejercer su derecho a voto allí donde deseen.



UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Carlos Salvador Armendáriz
Diputado por Navarra

Plaza Príncipe de Viana, 1 - tfo.: 948 22 34 01 / 02 Fax: 948 21 08 10 - 31002 Pamplona
www.upn.org - csalvador@upn.org

“ El Congreso de los Diputados :

1.- Manifiesta la necesidad de estudiar la fórmula más adecuada para que la normativa electoral permita a los ciudadanos vascos y navarros que tuvieron que abandonar su tierra por la presión terrorista puedan votar en sus territorios de origen, manteniendo la confidencialidad de su actual domicilio (empadronamiento) fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra.

2.- Insta al Gobierno a fiscalizar de forma incesante cada una de las acciones de Bildu así como la totalidad de su actuación en todos los ámbitos a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, así como, en su caso, instar a su ilegalización.”

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre regeneración democrática**

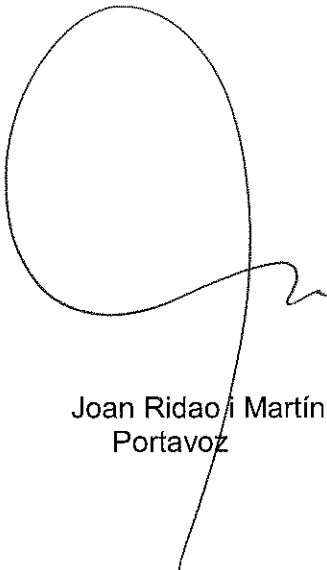
El CIS muestra que “la clase política y los partidos políticos” son percibidos por la ciudadanía como el tercer problema más importante de la sociedad. Este dato debe ser un elemento de reflexión y obliga a la clase política a tomar medidas de higiene, transparencia y profundización en la democracia.

El mandato parlamentario para que el Gobierno presente un Proyecto de Ley de transparencia es un paso positivo, pero sigue siendo insuficiente. Hay que adoptar toda una serie de medidas para avanzar en la transparencia, en la participación ciudadana y en la extinción de posibles privilegios que tenga la clase política.

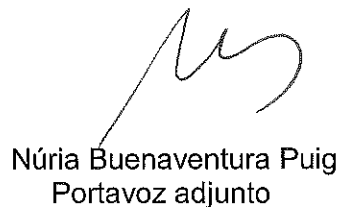
Por todo ello, se presenta la siguiente Propuesta de Resolución:

1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a presentar un Proyecto de Ley de Ética Política, en que se incluyan las siguientes medidas:
 - a) régimen de incompatibilidades de cargos y excargos públicos, y en particular de los expresidentes del Gobierno y del Congreso y Senado.
 - b) obligación de dedicación plena al cargo público
 - c) medidas de austeridad para evitar gastos superfluos, como los regalos institucionales o los viajes en Clase Preferente.
 - d) medidas efectivas de orden fiscal, administrativo y penal contra la corrupción
 - e) limitar la remuneración anual de todos los cargos públicos, de manera que en ningún caso pueda ser superior a la del Presidente del Gobierno
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral con los siguientes objetivos:
 - a) Asegurar la proporcionalidad entre sufragios y escaños
 - b) Los procesados por irregularidades relacionadas con su cargo público no puedan ser candidatos a ocupar un cargo público electo o de confianza
 - c) Revocación y limitación de mandatos
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una reforma de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, con el objetivo de convertirla en un verdadero instrumento de participación democrática. La reforma contemplará las siguientes medidas:
 - a) los referéndums de iniciativa ciudadana,
 - b) la convocatoria de referéndums de ámbito autonómico,
 - c) referéndum abrogativo de leyes

4. El Congreso de los Diputados se compromete a proceder al nombramiento urgente de los cargos vacantes en las instituciones del Estado, comenzando por el Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo.
5. El Congreso de los Diputados expresa la voluntad de avanzar en su compromiso con los derechos humanos como un valor fundamental de la regeneración política, e insta al Gobierno a presentar, antes del 15 de septiembre:
6. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a
- a) un nuevo Plan de Derechos Humanos;
 - b) una Estrategia integral de prevención y lucha contra el Racismo y la Xenofobia, que contemple la actuación de la Fiscalía contra los partidos que defiendan posturas racistas o xenófobas, entre otras medidas
 - c) un Plan eficaz de prevención de la tortura y los malos tratos
 - d) un Protocolo de actuación para incorporar la situación de los derechos humanos en la agenda política de todas las relaciones bilaterales
 - e) un Informe caso por caso de todas las transferencias y exportaciones de armas en los países de África del Norte y de Oriente Próximo, tanto en las licencias ya autorizadas como en las que se encuentran en proceso.



Joan Ridao i Martín
Portavoz



Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunto



Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula siguiente **Propuesta de Resolución sobre el Pacto por el euro**.

Las orientaciones en materia de política social y económica contenidas en el llamado Pacto por el euro, aprobado en marzo de este año por el Consejo Europeo, significan la renuncia a articular medidas a escala europea que permitan incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Las propuestas en forma de nuevos ajustes presupuestarios y de presión a la baja en los salarios, las prestaciones sociales o la calidad de los servicios públicos como fórmulas para la mejora de la productividad y la competitividad, solo pueden incidir negativamente en la demanda interna europea entorpeciendo la recuperación económica y del empleo, además de fomentar la divergencia económica y social entre los países de la Unión Europea. Por el contrario, las políticas de ajuste fiscal están reduciendo en la mayoría de los Estados miembros las necesarias inversiones en educación, investigación e infraestructuras, factores estos relevantes a la hora de mejorar la productividad y la eficiencia de las distintas economías.

No se avanza en la regulación del sistema financiero, la coordinación de las políticas fiscales o el gobierno de los mercados de la deuda para gestionar la crisis de las deudas soberanas. Las conclusiones de la Cumbre del Consejo Europeo celebrada en Bruselas los días 23 y 24 de junio, ratifican la continuidad de las políticas de austeridad y de ajustes presupuestarios, y ni siquiera se adoptan medidas creíbles para alejar a Grecia de la suspensión de pagos y superar la recesión, fomentando nuevos ataques especulativos sobre la deuda de varios países europeos.

Esta gobernanza de la austeridad ha de ser corregida para garantizar verdaderas políticas de recuperación económica y evitar el desmantelamiento del modelo social europeo.

Por todo ello se presenta la siguiente

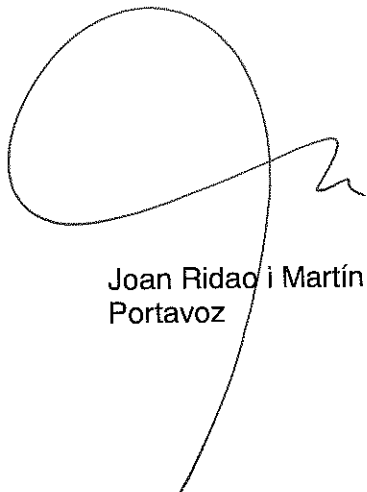
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender en las instituciones europeas:


- Un acuerdo político y social europeo por la recuperación de la economía y el empleo, mediante políticas que basen los incrementos de la productividad en la educación, la investigación y la innovación.
- El fortalecimiento del Modelo Social Europeo cuyos principios y valores han de formar parte de la recuperación económica y de la creación de empleo.
- La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras para financiar políticas inversoras europeas y un plan europeo de recuperación económica.

- La emisión de eurobonos para frenar la especulación y gestionar con mayores garantías la crisis de las deudas soberanas.

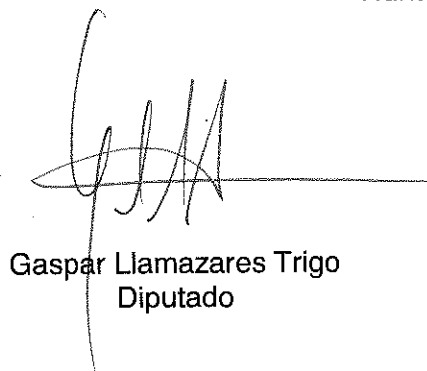
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de junio de 2011



Joan Ridao i Martín
Portavoz



Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunta



Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre la Dación en pago**

La concesión de hipotecas por más del 100% del valor teórico de mercado de la vivienda libre a personas que tienen que aportar más de 50% de sus ingresos para adquirir dicha vivienda es una práctica especulativa que, antes o después, explota. Las personas que se han sobre-endeudado en los pasados años comprenden esta situación sin mayores problemas. Se les vendió una vivienda libre a un precio realmente alto, se les concedió un crédito hipotecario que comprometía la mayor parte de su renta personal o familiar y se le dijo que podía estar tranquilo pues la vivienda libre siempre sube de precio, iba a poder pagar su crédito y además iba a hacer un magnífico negocio. Sin embargo, hoy es evidente que quienes han hecho un magnífico negocio con los ciudadanos sobre-endeudados son los propietarios de suelo, los promotores y constructores de vivienda y las entidades crediticias con mayor presencia en el mercado hipotecario, todo ello acompañado por una injustificable inhibición estatal. Estas espirales inflacionistas y especulativas sobre el precio de la vivienda libre no van a disciplinarse a través de autorregulación de los sectores implicados y deberá ser la legislación la que marque un campo de juego razonable.

Precisamente para tal propósito esta resolución establece un sistema de límites temporales y cuantitativos a los créditos hipotecarios que pueden ser concedidos por una entidad crediticia a un particular para la compra de una vivienda libre. Estos límites, ya existentes en otros estados de la UE, no solo limitarán el sobre-endeudamiento hipotecario, sino que reducirán progresivamente el precio de la vivienda libre, al tener que adaptarse ésta a la capacidad media de compra de los ciudadanos, dentro de ese marco contra el sobre-endeudamiento.

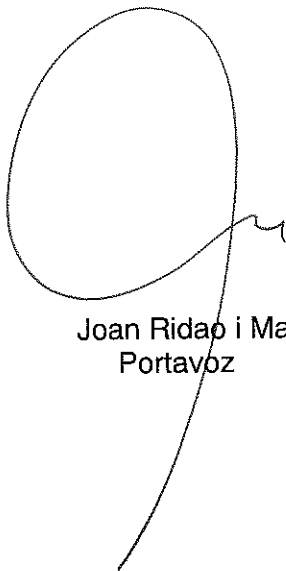
El contexto de crisis internacional hace necesario adoptar medidas que eviten dejar a miles de personas sin vivienda, sin recursos económicos o en situaciones de indefensión, como el endeudamiento de las familias debido a la responsabilidad ilimitada de los préstamos con garantía hipotecaria o el endeudamiento estimulado por una etapa de reducidos tipos de interés hipotecario y una apelación constante al consumo immoderado en los últimos años.

Por ello, es necesario introducir la dación en pago y otros mecanismos de mejora en la regulación de la protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de la vivienda, para corregir las situaciones de fragilidad detectadas en el mercado de la vivienda, así como una regulación de los procesos de ejecución de los créditos con garantía hipotecaria también más protectora de los intereses de una ciudadanía que se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad ante la grave crisis económica.

Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Regular la aceptación de la dación en pago del piso hipotecado para los deudores de buena fe, si se acredita que es la residencia habitual, liberando por tanto a las personas y familias de la totalidad de la deuda.

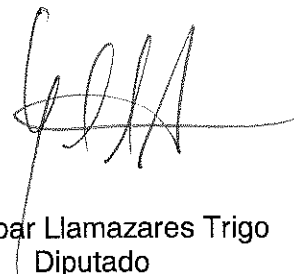
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de junio de 2011

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

Joan Ridap i Martín
Portavoz

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and curves, ending in a small hook.

Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunta

A handwritten signature in black ink, featuring a complex, multi-looped structure with a long horizontal stroke extending to the right.

Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula siguiente **Propuesta de Resolución sobre la energía nuclear**

El grave accidente ocurrido en Fukushima, del cual todavía desconocemos todas las consecuencias está haciendo replantear a nivel mundial el papel de la energía nuclear y más concretamente las cuestiones relacionadas con la seguridad de las centrales. La Unión Europea acordó realizar pruebas de esfuerzo a todas las centrales nucleares y en este sentido el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la necesidad de realizar stress test a todas las centrales nucleares españolas antes de finalizar el año 2011, condicionando la continuidad de su actividad al resultado de las mismas.

La media de cierre de las centrales nucleares en el mundo es de 22 años y en Europa entre 24 y 25 años. Hoy prescindir de las centrales nucleares no es ninguna utopía, como lo demuestra Alemania, uno de los países más ricos e industrializados del mundo. El Gobierno alemán ha decidido que todas sus centrales nucleares dejarán de funcionar definitivamente en el 2022 y, como primera medida de este plan de cierre, las ocho centrales nucleares más antiguas paralizadas tras el accidente de Fukushima, no volverán a funcionar.

Fukushima debe significar el fin de la era nuclear, acelerando el abandono generalizado de esta energía tan peligrosa que estaba ya en franca retirada antes del accidente japonés. En la Unión Europea está siendo abandonada: en los últimos diez años; la potencia nuclear instalada se ha reducido en 7.594 MW, mientras que se han incorporado más de 100.000 MW de energías renovables. En España, en 2010 la energía nuclear aportó sólo un 21% de la electricidad, mientras que las renovables aportaron ya un 35%, subiendo al 38% en los dos primeros meses de 2011.

En nuestro país, la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basada al 100% en energías renovables quedó demostrada en el informe "*Renovables 100%*" de Greenpeace, que analiza las posibilidades de las renovables en la península en el horizonte 2050. Este fue el primer estudio en analizar seriamente esta posibilidad.

Posteriormente han aparecido otros informes que adelantan el horizonte. El documento "*Un nuevo modelo energético para España. Recomendaciones para un futuro sostenible*", publicado en 2009 por la Fundación Ideas para el Progreso del PSOE, muestra cómo la energía nuclear se podría sustituir de forma acelerada para 2016.

El informe "*[R]evolución Energética*", elaborado por el Centro Aeroespacial Alemán para Greenpeace y el Consejo Europeo de las Energías Renovables, demuestra que la energía nuclear puede ser sustituida completamente en todo el mundo antes de 2050, cuando las renovables producirían un 94,6% de la electricidad mundial y un 97% de la europea.

¿Qué sentido tiene asumir el riesgo de que suframos un accidente nuclear cuando, afortunadamente, gracias a las energías renovables, podemos cerrar rápidamente todas las centrales nucleares?

El gran lema de que la energía nuclear era limpia, barata y segura se ha venido abajo por completo. Los dos primeros argumentos ya eran fácilmente rebatibles, teniendo en cuenta tanto la cantidad como calidad de los residuos y la falta de internacionalización de los costes de generación nuclear (planes e infraestructuras de emergencias, desmantelamiento, gestión de residuos...) pero también acabamos de comprobar que la energía nuclear es incapaz de asegurar la seguridad.

En España es un error pretender minimizar lo que está pasando porque aquí la seguridad tampoco ha sido una prioridad en la gestión de nuestras centrales. Cuando creíamos imposible otro Chernóbil porque nos aseguraban que era consecuencia de una tecnología anticuada y de un sistema político y económico fallido, se está reproduciendo a cámara lenta en Japón –la segunda economía mundial y que contaba con tecnología norteamericana-, que a día de hoy todavía no es capaz de delimitar el alcance del accidente, hecho que demuestra la ingobernabilidad de la energía nuclear y la caída de un mito.

Países nuclearizados como Alemania ya han dado el primer paso, y en España sería un error no interpretar las consecuencias del accidente de Fukushima y actuar responsablemente.

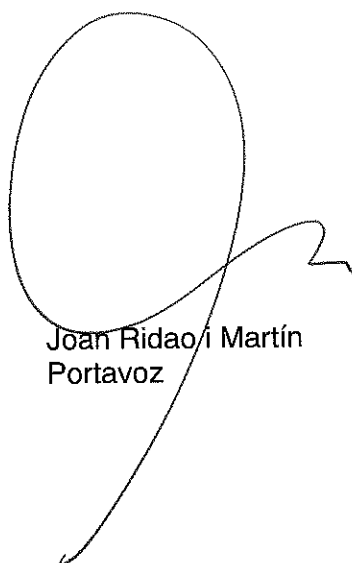
Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un calendario de cierre de las centrales nucleares de acuerdo con su vida de diseño y sin posibilidad de renovación extraordinaria de las concesiones. Dicho calendario incluirá el cierre inmediato de las centrales de Garoña y Cofrentes y la no renovación de la licencia de explotación de la central nuclear Ascó I.
2. Presentar, ante esta Cámara, un proyecto de ley que establezca la creación de un fondo que se nutrirá del total de los beneficios de las centrales amortizadas, y destinará un 20% al mantenimiento y seguridad de las centrales, un 15% al gestor de la central, un 15% a la dinamización social y económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales y un 50% al impulso y la inversión en planes de energías renovables y de mejora del ahorro y la eficiencia energética.
3. Llevar a cabo antes del 31 de diciembre de 2011 la realización de "stress tests" obligatorios para todas las centrales nucleares, y cerrando de inmediato las que no los superen.
4. Promover la modificación de la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, para:
 - a) instaurar un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares donde el explotador de las instalaciones asuma con fondos propios de forma ilimitada la cuantía de las reclamaciones y en el tiempo para reclamar daños.
 - b) eliminar el mecanismo del sistema eléctrico para dotar ese fondo económico, por cuanto es un subsidio encubierto a las compañías con centrales nucleares.
5. Cancelar el actual proceso para construir un cementerio nuclear centralizado (ATC) y que cualquier decisión al respecto de la gestión de los residuos

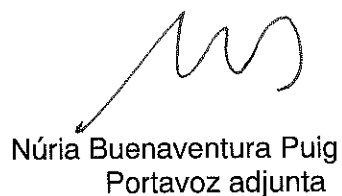
radiactivos de alta actividad y combustible nuclear gastado se supedita a la previa puesta en marcha de un plan de cierre progresivo de las centrales nucleares y a la adopción de un amplio consenso social, medioambiental y territorial al respecto.

6. Promover una Ley de Energías Renovables con el objetivo de generar al menos el 50% de la electricidad en España mediante energías renovables para el año 2020 y el 100% antes de 2050.
7. Promover una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética, con un objetivo obligatorio de reducción del uso de energía primaria del 20% para el año 2020 sobre los niveles de 2005.

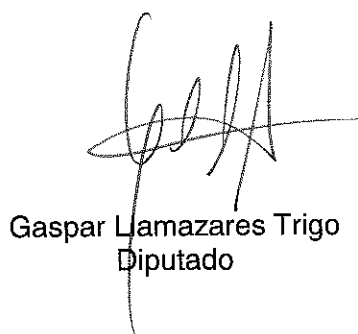
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de junio de 2011

A large, stylized signature consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small upward flick.

Joan Ridao i Martín
Portavoz

A signature consisting of a series of connected loops and a final downward stroke.

Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunta

A signature with a large, sweeping loop at the top and several vertical strokes below.

Gaspar Lamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula siguiente **Propuesta de Resolución sobre la reforma del sistema financiero.**

La profunda crisis económica por la que atravesamos ha evidenciado, entre otras muchas cosas, la necesidad de afrontar reformas en el sistema financiero. Reformas que superan el ámbito nacional pero que, en todo caso, han de abordar una realidad inapelable: el sistema financiero ha abandonado su función social a la hora de intermediar entre el ahorro y las necesidades de financiación de familias y empresas.

Para mejorar dicha intermediación y para evitar, además, que la crisis de la banca privada se transforme en sistémica es preciso potenciar instrumentos públicos de intervención en el mercado financiero.

También es importante abordar cuestiones como el sobreendeudamiento familiar, los desmesurados incentivos vinculados al riesgo que reciben los directivos de las entidades financieras, la falta de liquidez para la economía productiva, los abusos en materia hipotecaria, las elevadas comisiones bancarias, la opacidad de ciertos productos financieros o el exceso de financiación a las actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario.

El Gobierno ha evitado reformar el sistema financiero en su conjunto. Las únicas reformas se han dirigido hacia las Cajas de Ahorro planteando unos criterios de viabilidad que significan su práctica desaparición como tales, en un proceso de bancarización de la mayoría de ellas.

Por todo ello se presenta la siguiente

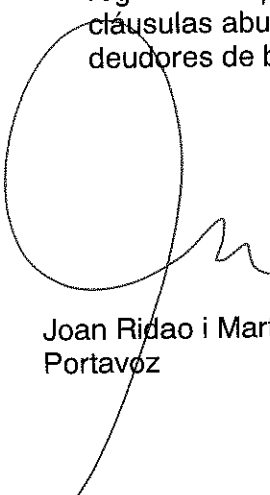
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Desarrollar una norma básica sobre Banca Pública que suponga el despliegue operativo directo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que considere las posibilidades que ofrece la nacionalización de las Cajas de Ahorro para recuperar su vinculación con las necesidades sociales y los territorios de sus Comunidades Autónomas.
- Vincular cualquier ayuda pública directa o indirecta a entidades financieras privadas al flujo de crédito hacia la economía productiva, y fijar un coeficiente de crédito para la financiación de familias y pequeñas y medianas empresas.
- Reducir y racionalizar las retribuciones de los directivos y miembros de los consejos de administración de las entidades financieras y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo.
- Implementar una tasa bancaria que permita constituir un Fondo de Reserva para afrontar con ciertas garantías futuras crisis del sistema financiero.

- Impulsar la introducción de una tasa de carácter internacional sobre las transacciones financieras especulativas.
- Emprender medidas legales y actuaciones políticas en el marco de la Unión Europea contra las agencias de calificación que se encuentran en una evidente situación de conflicto de intereses, y promover la creación de una Agencia de rating europea.
- Establecer límites en la concesión de hipotecas contemplando que el pago mensual no supere el 30% de los ingresos familiares, que el periodo de amortización no supere 30 años y que el importe de la hipoteca no exceda el 80% del valor de la vivienda hipotecada o el 100% en caso de estar sujetas a un régimen de protección pública; reducir las comisiones bancarias y eliminar las cláusulas abusivas; y aceptar la dación en pago de la vivienda hipotecada para los deudores de buena fe si se acredita que es la residencia habitual.

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de junio de 2011



Joan Ridao i Martín
Portavoz



Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunta



Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula siguiente **Propuesta de Resolución sobre medidas para una fiscalidad justa, solidaria y ambiental**.

El reparto de los costes de la crisis ha sido muy desigual entre la ciudadanía. El actual Gobierno no ha tomado las decisiones que garantizaran que la factura económica y social de la crisis la pagaran quienes la habían causado. Al contrario, las principales medidas para afrontar la crisis han consistido en subir impuestos indiscriminadamente como el IVA, recortar salarios, eliminar ayudas, reducir pensiones, privatizar organismos públicos rentables y reducir los gastos presupuestarios incluso en aquellas partidas más necesarias. Todo ello ha puesto en peligro muchos derechos sociales y ha supuesto un empeoramiento objetivo de la situación de la clase trabajadora. Sin embargo, las personas con más recursos no han visto amenazada su posición de privilegio, que incluso se ha visto reforzada tras la crisis. Las únicas medidas adoptadas por el ejecutivo que han afectado a las rentas más altas han quedado en lo meramente estético como el incremento residual de los tramos más altos del IRPF.

La fiscalidad es uno de los principales elementos de redistribución de la riqueza. A pesar de la retórica del ejecutivo respecto a la importancia política que otorgan a la cohesión social, la práctica demuestra una absoluta pasividad ante el alarmante incremento de las desigualdades sociales y de la pobreza en nuestro país. Sobre el incremento de la desigualdad social, vemos como en los últimos años el coeficiente o índice de Gini, magnitud que mide la desigualdad en los ingresos de los individuos, se está situando en valores como los de 1995. Es decir, se han perdido los avances de igualdad de los últimos 15 años, y la diferencia entre las personas más ricas y los que menos ingresos tienen, con la crisis ha crecido a pasos agigantados. Respecto los niveles de pobreza, el Estado Español tiene un 19,5% de su población en riesgo de pobreza, que alcanza un 25,2% en la población mayor de 65 años. Es el séptimo de la UE-27 con más porcentaje de población en riesgo de pobreza, sólo superado por Letonia, Rumania, Bulgaria, Lituania, Estonia y Grecia.

La retórica del gobierno sobre su voluntad de priorizar la cohesión social y el Estado del Bienestar, no se ha visto acompañada de las decisiones económicas que lo permitan de manera efectiva. Hasta ahora, la sumisión y el seguidismo a las imposiciones de las instituciones financieras no democráticas, ha supuesto una carrera continua de decisiones económicas y políticas que perjudican a la mayoría de la población, con la única obsesión de reducir el déficit sin preocuparse lo más mínimo por los devastadores efectos sociales de estas decisiones.

Sin embargo, en esta carrera por reducir el déficit, se han ignorado las políticas de ingresos, el incremento de una fiscalidad que aproxime el Estado Español a la media de la OCDE. Hay algunas propuestas de aplicación urgentes si realmente se quiere mantener la cohesión social y el Estado del Bienestar, y hacer que los causantes de la crisis no sean los ganadores. A nivel fiscal, las principales urgencias consisten en rectificar decisiones que nunca deberían haberse tomado si se quería conservar la cohesión social: la eliminación del Impuesto de Patrimonio, las rebajas fiscales en IRPF a las rentas más altas, la universalización de los incentivos en Impuesto de Sociedades incluso para las empresas con beneficios millonarios que despiden

trabajadores y una lucha contra el fraude que, aunque mayor a la de los anteriores gobiernos, todavía es claramente insuficiente.

Por todo ello se presenta la siguiente

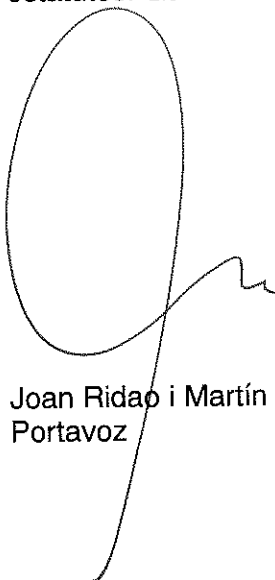
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- 1.- Recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio para gravar a las grandes fortunas.
- 2.- Revisar el Impuesto de Sociedades para aumentar la contribución del capital empresarial a las arcas públicas estableciendo, en particular, un tipo del 35% para las bases imponibles que superen los 100 millones de euros.
- 3.- Crear un Impuesto sobre Bienes Suntuarios aplicable a los productos y servicios considerados de lujo, y reducir los tipos del IVA a determinados bienes y servicios de primera necesidad.
- 4.- Equiparar en el IRPF la tributación entre rentas del trabajo y del capital.
- 5.- Situar como verdadera prioridad política en las participaciones en el Ecofin, el Consejo Europeo y las reuniones del G20 el impulso de un Impuesto internacional a las transacciones financieras con un calendario concreto y un tipo impositivo que disuada a los inversores financieros a realizar operaciones únicamente especulativas, similar a la Tasa Tobin o Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
- 6.- Desarrollar la fiscalidad verde o ambiental, con el objetivo de influir en buenas prácticas de impacto ambiental que pueden suponer sólidos ahorros en políticas contra el cambio climático o de recuperación del medio natural.
- 7.- Implementar un Plan de Lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales que incluya, en particular, las siguientes medidas:
 - 7.1.- Introducir un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales en la normativa del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, el no reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español y la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, salvo que suministren a la Administración Tributaria española la misma información que sobre las operaciones realizadas en territorio nacional.
 - 7.2.- Incrementar los recursos humanos y económicos para la prevención del fraude fiscal y crear el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, basado en el reconocimiento y en la ampliación de funciones como instrumento para potenciar el alcance de la AEAT y la IGAE en la lucha contra el fraude, la economía sumergida y el control del gasto público.

8.- Control efectivo de las SICAV, sometiéndolas al control fiscal de la Agencia Tributaria en lugar de la CNMV como sucede actualmente y reformar de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, para establecer un límite máximo de participación en una sociedad de inversión de capital variable, tomando como referencia los límites del capital máximo fijado en sus respectivos estatutos. Garantizar que tributan en la misma cuantía que cualquier otra sociedad.

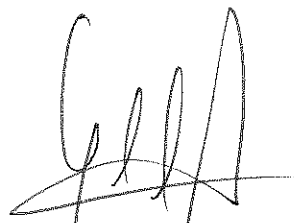
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de junio de 2011



Joan Ridao i Martín
Portavoz



Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunta



Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula siguiente **Propuesta de Resolución sobre la mejora del Estado del Bienestar.**

Los distintos parámetros que pueden medir lo que entendemos como estado del bienestar atestiguan la brecha que nos separa en la materia con la UE-15. Estas diferencias se extienden al conjunto de transferencias sociales y servicios públicos que son elementos fundamentales de la protección social. Pero hay que señalar, además, lo básico que es para el desarrollo del Estado Social la creación de empleo de calidad, la orientación de la política económica hacia el pleno empleo.

En el último ciclo expansivo se creó en nuestro país empleo con intensidad y se redujo la tasa de paro, pero buena parte del empleo creado lo fue de escasa calidad, muy frágil, como ha quedado patente con la crisis. En todo caso, poca política social se ha practicado cuando los salarios apenas han logrado mantener el poder adquisitivo y han ido perdiendo progresivamente participación en la Renta Nacional.

La crisis financiera mundial fue un catalizador para la explosión de nuestro modelo de crecimiento y de empleo. La posterior recesión afectó a los ingresos públicos y la reducción acelerada del déficit, retirando precipitadamente los estímulos fiscales, acabó por afectar al gasto social.

La salida social a la crisis que el Gobierno decía defender terminó por convertirse en un contundente ajuste social, recortando a corto plazo salarios a los empleados públicos, congelando pensiones, amortizando empleo público o recortando también programas de servicios sociales.

Pero además, se han articulado medidas que, más allá de buscar ahorros a corto plazo para cumplir con las exigencias del déficit público programado, afectan de forma estructural al modelo social: una reforma laboral que abarata el despido y recorta derechos laborales y una reforma en las pensiones que también recorta las expectativas en las prestaciones de los futuros pensionistas.

Las reformas y recortes operan sobre unos servicios sociales poco desarrollados, que son por otra parte una potencial fuente importante de creación de empleo, sobre unas pensiones relativamente bajas, y sobre unos niveles de pobreza que ni siquiera los años de expansión económica redujeron sensiblemente.

En paralelo, se ha renunciado a una política fiscal progresiva en materia de ingresos para permitir mejorar la redistribución de la renta y contar con recursos suficientes para financiar el desarrollo gasto social.

Por todo ello se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Incrementar el gasto en protección social hasta los parámetros medios de la UE en paralelo a una reforma fiscal en profundidad que asegure ingresos suficientes y una mejora en la equidad y progresividad del sistema tributario.
- Aumentar el Salario Mínimo Interprofesional atendiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea.
- Implantar una prestación universal para las personas desempleadas que hayan agotado su prestación contributiva, con el único requisito de demostrar una búsqueda activa de empleo.
- Restituir las revalorizaciones no aplicadas con motivo de la congelación durante 2011 de las pensiones.
- Adoptar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las medidas necesarias para evitar la introducción de cualquier fórmula que suponga un copago sanitario y garantizar la gestión pública de los servicios y centros sanitarios públicos, evitando privatizaciones encubiertas de la gestión sanitaria pública.
- Incrementar la cobertura pública de aquellos programas y servicios sociales que resultan ser una importante fuente de empleo y que crean condiciones favorables para la incorporación de la mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad.
- Revisar la reforma laboral desarrollando medidas que contribuyan a reducir la excesiva flexibilidad externa de nuestro mercado de trabajo, recuperando el principio de causalidad en la contratación de carácter temporal y limitando la extinción de contratos laborales y los despidos a situaciones de justificada necesidad, y apostar por la flexibilidad interna incrementando los mecanismos de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa con efectos en las condiciones de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de junio de 2011



Joan Ricao i Martín
Portavoz



Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunta



Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre cumplimiento y desarrollo de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica**

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se ha demostrado insuficiente para reparar a todas las víctimas “que padecieron violencia durante la guerra civil y la dictadura”, como dice la propia Ley, e inalcanzable para reparar aquellas otras víctimas que se produjeron en los años de la Transición como consecuencia de la violencia política.

Asimismo, el Estado no ha cumplido con la responsabilidad que tiene de hacer efectivo el derecho de saber de los familiares de las víctimas, adoptando una actitud activa y directa en la localización de éstas, así como en la disposición de los osarios. En consecuencia, todavía no se ha producido la necesaria reparación en tal sentido.

Tampoco se ha producido la reparación de aquellas víctimas que fueron condenadas por unas sentencias y unos tribunales ilegítimos, que siguen teniendo validez – a pesar de la posible declaración de ilegitimidad otorgada a manera de Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal expedida por el Ministro de Justicia-, en tanto que no han sido consideradas nulas de pleno derecho.

El Ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado podrían haber adoptado, de acuerdo a los Arts. 956 y 961, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los recursos de revisión de todas las sentencias “ilegítimas, por vicios de forma y fondo” dictadas por los Consejos de Guerra y demás tribunales franquistas, también “ilegítimos”, y no lo han hecho.

En este sentido, es necesario destacar la resolución aprobada por el Parlament de Catalunya reclamando la anulación de las sentencias que condenaron a pena de muerte al President Lluís Companys, el acuerdo tomado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y la frustración que generó el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado.

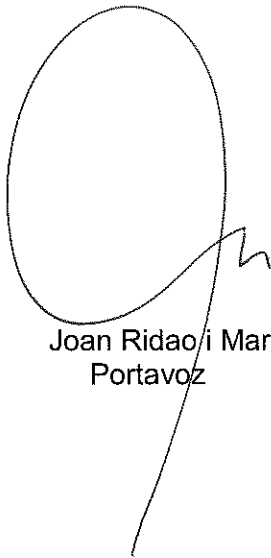
Por otro lado, hay que señalar que el Decreto que desarrolla la Ley restringió todavía más los derechos que en ella se establecen, como sucede en el caso de Salvador Puig Antich.

También continúa habiendo dificultades de acceso a los archivos, y en particular a los archivos militares por parte de los estudiosos.


Y, finalmente, respecto a al desarrollo que se ha producido de la Ley, sería necesario que el Gobierno concretara mejor la labor realizada respecto a la información eficaz a los afectados para la percepción de las reparaciones económicas. Especialmente interesante sería conocer con concreción las denegaciones de las solicitudes porque sólo un pequeño porcentaje de estas ha tenido una resolución favorable. En este sentido, le instamos a remitir un informe al Congreso de los Diputados para poder analizar los datos y evaluarlos correctamente.

Por todo ello, se presenta la siguiente Propuesta de Resolución:

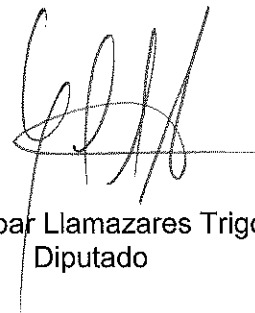
8. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar en los próximos seis meses, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales, un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos por miembros de Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, prisioneros de campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 52/2007."



Joan Ridao i Martín
Portavoz



Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunto



Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre orientación social y solidaria de los Presupuestos Generales del Estado**

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a contemplar las siguientes medidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2012:

1. Recuperar, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2012, el mismo gasto social que fue aprobado en los Presupuestos para el año 2008 en sanidad, educación, política social e inmigración y, en particular, en las siguientes partidas:
 - a) Fondo de integración de inmigrantes
 - b) Dependencia
 - c) Atención a la infancia y las familias
 - d) Fondo para cofinanciar plazas del primer ciclo de educación infantil del servicio público de educación
2. Creación de un Fondo Estatal de Lucha contra la Pobreza con una asignación inicial de 100 millones de euros, gestionado por el Ministerio de Sanidad y Política Social en colaboración con las Comunidades Autónomas, y cuya distribución se realizará en función del porcentaje de población que viven en la pobreza en cada Comunidad Autónoma
3. Avanzar en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Pobreza reforzando la cantidad, la calidad y el impacto de la ayuda. Y en particular cumplir con su punto B1.c que limita la ayuda reembolsable al 5% y excluir como posibles receptores de la AOD reembolsable a los Países Menos Adelantados (PMA), países altamente endeudados (HIPC), así como a países con bajos ingresos (LIC-Low Income Countries), países con un Índice de Desarrollo Humano Bajo y Países Altamente Endeudados de Renta Media
4. Cumplir con el compromiso de destinar el 0'7% del PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo
5. Realizar un recorte del gasto militar de, como mínimo, un 15%
6. Congelar del incremento del número de efectivos de las Fuerzas Armadas de España y presentar un plan de reducción de efectivos militares
7. Paralizar la ejecución de nuevas partidas de I+D militar previstas para este año y trasladar, en el marco del próximo proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, el 50% de los recursos destinados a I+D militar a I+D civil.
8. Recortar un 15% la asignación de la Casa Real

Joan Ridao i Martín
Portavoz

Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunto

Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre el cumplimiento de los acuerdos de financiación autonómica y de impulso de infraestructuras**

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar todos los trámites necesarios para que se haga efectiva en este ejercicio la transferencia a la Generalitat de Catalunya del anticipo correspondiente al fondo de competitividad del 2011, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la ley 22/2009, de 18 de diciembre
- Determinar la liquidación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya (EAC), de los años ya vencidos de acuerdo con la metodología y procedimientos acordados en el marco del grupo de trabajo establecido entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya y para determinar lo previsto en la DT 2ª de la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias
- Respetar rigurosamente el principio constitucional de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, para que éstas puedan decidir libremente su regla de techo de gasto, en el marco de disciplina presupuestaria.
- Concretar el modelo aeroportuario en los términos de la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno. (173/000186)
- Acelerar la tramitación y la ejecución del corredor mediterráneo ferroviario desde Algeciras hasta la frontera francesa, incluyendo los accesos a los puertos de Tarragona y Barcelona.

Joan Ridao i Martín
Portavoz

Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunto

Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre la oficialidad de la lengua catalana en la Unión Europea**

El 13 de junio de 2005 el Consejo de la Unión Europea adoptó unas Conclusiones relativas al “uso oficial de otras lenguas en el Consejo y, en su caso, en otras instituciones y órganos de la Unión Europea”. Con estas Conclusiones el Consejo dio respuesta a la solicitud presentada por el Gobierno español el 13 de diciembre de 2004 para que pudieran utilizarse en la Unión Europea las lenguas españolas, distintas del castellano, que cuentan con estatuto oficial en España.

En este sentido, el gobierno español impulsó y firmó acuerdos con el Consejo de la Unión Europea (7 de noviembre de 2005), Comité de las Regiones (16 de noviembre de 2005), Comisión Europea (21 de diciembre de 2005), con el Comité Económico y Social (7 de junio de 2006) y con el Defensor del Pueblo (30 de noviembre de 2006).

Sin embargo, el gobierno español no ha cumplido la parte que le corresponde para hacer efectivos dichos acuerdos y, en consecuencia, éstos no son más que papel mojado.

Por otro lado, el Reino de España no ha formalizado ningún acuerdo con el Parlamento Europeo, que debería haber sido prioridad teniendo en cuenta que es el organismo donde se representa la soberanía popular europea.

La oficialización del catalán sería factible y tendría un coste mínimo porque la mayoría de traductores de castellano en la Cámara europea son catalanohablantes.

Asimismo, debe recordarse que siempre que un Estado miembro ha demandado la oficialización de una lengua, la UE la ha aceptado. Y más aún si tenemos en cuenta que el catalán sería la decimotercera lengua con más hablantes de la UE -más de diez millones- de las 23 que actualmente están reconocidas.

La oficialización del catalán es una responsabilidad del Estado, y únicamente depende de su actuación para ser reconocido como lengua oficial en el seno de la Unión Europea.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente Propuesta de Resolución:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

demandar la oficialidad del catalán en el marco de las negociaciones de adhesión de Croacia a la Unión Europea por el que se reformará el Reglamento 1/58 sobre el régimen lingüístico de las instituciones comunitarias para incluir el Croata.

Joan Ridao i Martín
Portavoz

Núria Buenaventura Puig
Portavoz adjunto

Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula siguiente **Propuesta de Resolución sobre el Reconocimiento del Estado de Palestina como sujeto de derecho internacional.**

El 15 de mayo de 2011 se celebró la Nakba ("la catástrofe"), Día del exilio de unos cuatro millones de palestinos dispersos por el mundo. Con este motivo, Saeb Erekat, el negociador de la OLP, organización que representa al pueblo palestino conforme al Derecho Internacional, anunció que está recabando apoyos internacionales para proclamar la independencia del Estado Palestino.

La cuestión del derecho de autodeterminación del mundo colonial estaba presente desde el final de la primera guerra mundial. En el pequeño territorio de la región de Palestina venían compitiendo desde principios del siglo XX los intereses de árabes y judíos. El pueblo judío permanecía disperso desde el siglo II de nuestra era. Los ataques contra las minorías judías en buena parte de Europa Oriental llevaron en 1897 al Congreso sionista de Basilea, a proponer la construcción de "*un hogar nacional judío*" en Palestina. El problema era que la "Tierra prometida" estaba habitada por otro pueblo y que formaba parte del imperio otomano. Mediante la Declaración Balfour(1917), el Foreign Office británico se comprometió ante lord Rothschild a apoyar la creación del mencionado "*hogar nacional judío*". En palabras de Arthur Koestler, "*La Declaración Balfour constituye uno de los documentos políticos más increíbles de todos los tiempos. Es un documento por el cual una primera nación promete solemnemente, a una segunda nación, el país de una tercera nación*".

Al término de la Primera Guerra Mundial y el hundimiento del imperio otomano, la Sociedad de Naciones situó bajo mandato británico a Palestina, cuyo acceso a la independencia quedó momentáneamente diferido. La hasta entonces escasa presencia de colonos judíos en la región se vio incrementada hasta casi medio millón de personas entre 1922 y 1941. Tras la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la Resolución 181/11, decidió la partición de Palestina en dos Estados independientes, uno árabe y otro judío, con un régimen internacional autónomo para la ciudad de Jerusalén bajo la autoridad de Naciones Unidas.

En 1948 fue creado y proclamado el Estado de Israel, condicionado a la existencia del otro. Más de tres millones de palestinos se vieron forzados al exilio por las presiones de Israel.

Desde entonces, la conflictividad entre árabes e israelíes fue constante y provocó cinco guerras muy sangrientas. Desde un principio hasta hoy, Israel no respetó las fronteras fijadas por la Resolución de partición y acrecentó su territorio a lo largo de los años, conquistando, colonizando y ocupando los territorios palestinos.

En la Resolución 242 de 1967, el Consejo de Seguridad ordenó que se retiraran las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en la Guerra de los Seis Días.

A raíz de la Declaración de Independencia del Estado de Palestina, aprobada unánimemente el 15 de noviembre de 1967 por el Consejo Nacional de Palestina, órgano legislativo de la OLP, un centenar de Estados procedieron a su reconocimiento como sujeto de derecho internacional, entre ellos todos los Estados sudamericanos salvo Colombia.

El pueblo y la Autoridad Nacional Palestina ya se han comprometido reconociendo a Israel en las fronteras de 1967, pero Israel difiere continuamente el reconocimiento del Estado Palestino y no cesa en sus actividades de colonización en Jerusalén oriental y en Cisjordania. En los últimos años, a partir de la Declaración de Oslo y de los distintos procesos de negociación, la comunidad internacional viene abogando por la solución de "dos Estados". Lamentablemente, el inmovilismo del actual gobierno israelí está bloqueando la vía negociadora.

Por ello, transcurridos más de 63 años de vigencia de la Resolución 181/11 de Naciones Unidas, el reconocimiento de Palestina ya no puede ser calificado de "premature" y puede acelerar la solución de "dos Estados".

España, que siempre ha abogado por esta solución, está llamada a liderar el reconocimiento del Estado palestino en las fronteras de 1967 y su admisión en la ONU, con plenos derechos en instituciones tales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. El reconocimiento del Estado Palestino sólo requiere la libre expresión de la voluntad soberana del Estado español, siendo una decisión discrecional que no está sujeta a la autorización de ningún otro Estado u entidad internacional.

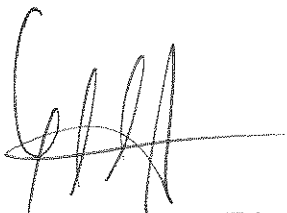
Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

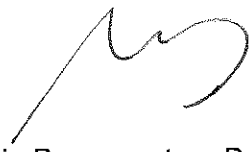
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- 1.- Reconocer expresamente a Palestina como Estado libre e independiente en las fronteras del 4 de junio de 1967.**
- 2.- Promover y encabezar en el seno de la Unión Europea el Reconocimiento del Estado de Palestina por parte de cada uno de los demás Estados miembros.**
- 3.- Apoyar con su voto en la Asamblea de Naciones Unidas, en septiembre de 2011, el reconocimiento del Estado de Palestina en las fronteras del 4 de junio de 1967.**

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de junio de 2011



Gaspar Llamazares Trigo
Diputado



Nuria Buenaventura Puig
Portavoz adjunta

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula siguiente **Propuesta de Resolución sobre biotecnología y transgénicos.**

España sigue siendo el único país de la UE en el que se cultivan transgénicos a escala comercial. Concretamente, unas 70.000 hectáreas de un maíz modificado genéticamente (MG) con propiedades insecticidas de la empresa multinacional Monsanto (MON 810). Cada vez más datos científicos confirman los riesgos que los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y los agrotóxicos empleados en su cultivo suponen para la salud y para el medio ambiente. Además, más de una década de cultivo en nuestro país ha demostrado sobradamente sus efectos socioeconómicos negativos.

Tras todos estos años de cultivo en España, se han comprobado muchos problemas, especialmente la imposibilidad de desarrollar la agricultura ecológica en presencia de cultivos transgénicos. Hay sobradas evidencias de casos de contaminación, y de la práctica desaparición del cultivo de maíz ecológico, con la consecuente subida de precios en los piensos ecológicos y sus repercusiones en la ganadería ecológica. Los agricultores y las agricultoras que optan por practicar una agricultura responsable con el medio ambiente y producir alimentos sanos y de calidad, ven como sus esfuerzos se pierden por culpa de los transgénicos.

Los consumidores y consumidoras están indefensos ante la introducción, en contra de su voluntad, y sin que en la mayoría de los casos puedan evitarlo, de transgénicos en su alimentación. La oposición social es mayoritaria y cada vez mayor, según demuestran los Eurobarómetros y las movilizaciones ciudadanas. Pero ello no parece impedir que, tal y como demostraron los cables de Wikileaks en diciembre de 2010, la política sobre transgénicos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) parezca dictada por los intereses de EEUU y de las empresas multinacionales.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.- Poner en marcha un sistema de trazabilidad real y eficaz que garantice el obligatorio etiquetado de los alimentos y de los piensos, es decir, un sistema que establezca los procesos administrativos que permitan a todos los importadores, productores de alimentos y piensos, cadenas de distribución (supermercados, etc.) ofrecer garantías sobre la trazabilidad de sus productos, *Atendiendo al Reglamento (CE) No 1829/2003 y al Reglamento (CE) no 1830/2003.*

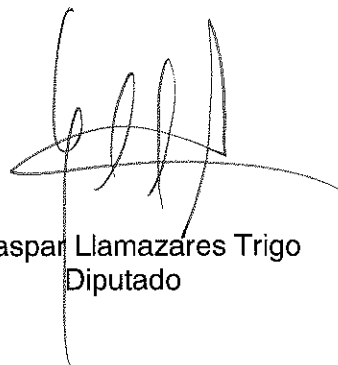
2.- Activar una Cláusula de Salvaguardia para prohibir el maíz transgénico MON 810, tal y como han hecho anteriormente Grecia, Austria, Hungría, Francia, Alemania, Polonia, Italia y Bulgaria, *Atendiendo al artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE y al Artículo 17.2 de la Ley 9/2003.*

3.- Poner en marcha del registro obligatorio y público de parcelas sembradas con OMG, *Atendiendo al artículo 31 de la Directiva 2001/18/CE y a la Disposición adicional Tercera de la Ley 9/2003 de 25 de abril.*

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 29 de junio de 2011



Nuria Buenaventura Puig
Portavoz adjunta

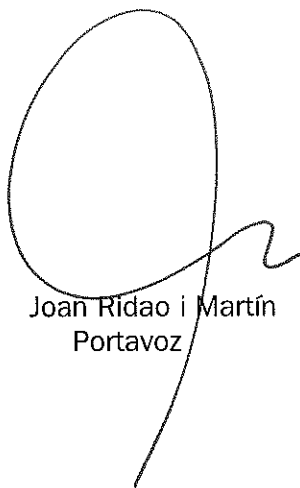


Gaspar Llamazares Trigo
Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El **GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA – IZQUIERDA UNIDA – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS**, a instancia del Portavoz **Joan Ridao i Martín**, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre la presencia vehicular de la lengua propia de su territorio en el sistema educativo**.

1. El Congreso de los Diputados manifiesta su preocupación ante el anuncio formulado por los nuevos gobiernos de la Comunidad Autónoma de Valencia e Islas Baleares de introducir modificaciones en el sistema educativo en relación al uso vehicular de sus lenguas propias que intensificarían su minorización.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a difundir la labor cultural y pedagógica de los sistemas educativos que introducen como lengua vehicular en la enseñanza la propia y oficial del territorio autonómico.

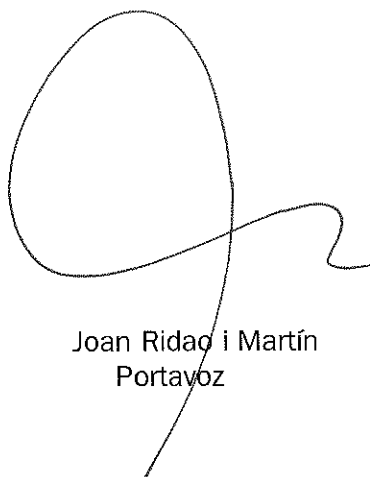


Joan Ridao i Martín
Portavoz

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El **GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA – IZQUIERDA UNIDA – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS**, a instancia del Portavoz **Joan Ridao i Martín**, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre austeridad de la Administración**

1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a presentar urgentemente ante esta Cámara, antes del mes de octubre, el informe sobre las duplicidades de servicios que ejerce la Administración General del Estado ante servicios también ejercidos en función de sus competencias por las Comunidades Autónomas. El informe deberá señalar los Ministerios, Secretarías de Estado, Direcciones Generales y otras instancias afectadas, así como el procedimiento y calendario para llevar a cabo una eficiente adecuación.
2. Presentar en el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a presentar ante esta Cámara, antes del mes de octubre, un informe calendarizado sobre la supresión de las diputaciones provinciales
3. Priorizar, ante el necesario recorte del gasto, aquellas inversiones en infraestructuras que aporten competitividad y rentabilidad económica en detrimento de aquellas infraestructuras no rendibles desde un punto de vista coste-beneficio e ineficaces, que no aportan ni competitividad económica, ni valor añadido, ni cohesión social y territorial.
4. Aplicar políticas de austeridad en la Administración General del Estado, cumpliendo con lo previsto en la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la racionalización y reducción de la estructura de la Administración General del Estado, mediante la austeridad, la eficiencia, la moderación del gasto y el cumplimiento del principio de lealtad institucional, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir la adecuada financiación autonómica (173/000077).



Joan Ridao i Martín
Portavoz

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formular las siguientes **Propuestas de Resolución** con motivo del **Debate de Política General en torno al Estado de la Nación**.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 29 de junio de 2011


EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA EL
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MUJER Y EMPLEO

La actividad del Gobierno, en el último año, ha sido intensa en un proceso de reformas estructurales. Se han conjugado reformas económicas con el mantenimiento de políticas sociales y con el apoyo a sectores estratégicos y a actividades innovadoras y con capacidad de crear empleo en el futuro. El objetivo es corregir las deficiencias del sistema productivo español que han motivado que la crisis económica internacional haya tenido efectos más negativos en nuestro país que en otros del entorno europeo. Entre estos objetivos se incluye la reforma de las políticas activas de empleo para adaptarlas a la realidad del mercado laboral y a las características del territorio para mejorar las posibilidades de inserción de las personas desempleadas.

Por el momento ya se están produciendo signos positivos en la evolución del empleo, pero el número de personas desempleadas es muy elevado y aún es necesario seguir incidiendo en medidas que mejoren la empleabilidad de trabajadores y trabajadoras especialmente jóvenes y personas de más edad que reflejan unas tasas de desempleo superior a la media. Estos dos grupos de trabajadores fueron objeto de particular atención en el Acuerdo Social y Económico, acordado por el Gobierno y por los interlocutores sociales el pasado 2 de febrero.

Por otra parte, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, dotó a nuestro país de un instrumento de valor incalculable para luchar contra la siniestralidad laboral y elevar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores. Para el impulso y ejecución de la Estrategia se han articulado a lo largo de su vigencia varios Planes de Acción que han dado cumplimiento a los objetivos marcados, estando hoy en pleno desarrollo el III Plan de Acción.

Durante el tiempo de vigencia de la Estrategia, los datos sobre siniestralidad laboral han venido reflejando una tendencia a la baja de los accidentes en todos los sectores de actividad. Solo en el año 2010 el índice de incidencia de los accidentes se redujo un 8,9 % con respecto al año anterior. Esta evolución positiva ha sido posible gracias al esfuerzo del Gobierno conjuntamente con las Comunidades Autónomas y agentes sociales.

Aún así España sigue teniendo un índice de incidencia elevado, por lo que es necesario seguir trabajando en esta misma línea.

Por otro lado, el colectivo de trabajadores autónomos como colectivo generador de riqueza y de crecimiento económico, debe ser objetivo

específico en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Si bien en los últimos años se ha avanzado en la materia con importantes textos normativos, como el Estatuto del Trabajo Autónomo, existen todavía algunas carencias, sobre todo en materia formación y sensibilización, que deben ser atendidas con planes y medidas dirigidas específicamente al colectivo, con un apoyo integral y estable adaptado a las características de su actividad en el mercado de trabajo y que redunde en una mejora de la productividad.

Por estos motivos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a:

1. Impulsar el proceso de diálogo social con los interlocutores sociales para elevar la cualificación de los jóvenes, especialmente a través de la formación profesional y de la experiencia, y mejorar su situación presente y futura en el mercado de trabajo, así como a poner en marcha la Estrategia global para el empleo de los trabajadores de más edad que, aborde una visión más integral, incluyendo medidas en materia de empleo, formación y condiciones de trabajo.
2. En el marco de la reforma de las políticas activas de empleo, desarrollar y aplicar la Estrategia Española de Empleo para contribuir a la reducción del número de personas desempleadas, teniendo en cuenta las necesidades de las personas, de las empresas y de los territorios.
3. Continuar con el fortalecimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales que consoliden la tendencia a la baja en los índices de siniestralidad y, especialmente, articular los procedimientos pertinentes para realizar el diagnóstico de la situación de la siniestralidad laboral que permitan abordar de forma eficiente, óptima y coordinada, con el consenso de los agentes sociales, las metas a alcanzar en la futura Estrategia contra la siniestralidad laboral.
4. Promover y dinamizar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores autónomos, continuando con las directrices de la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, en un claro esfuerzo de reducir los índices de siniestralidad de este colectivo.

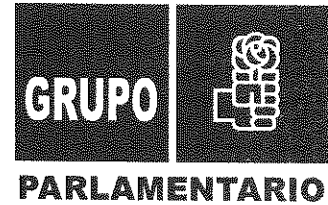
En este sentido, los agentes implicados -asociaciones de trabajadores autónomos, sindicatos, organizaciones empresariales y Administraciones Públicas competentes- asumirán un papel activo impulsando, y teniendo en cuenta las peculiaridades que reviste esta materia en el colectivo, la formación en materia preventiva, facilitando el asesoramiento técnico necesario para implantar las mejores condiciones de seguridad y salud, y por último, diseñando y desarrollando campañas informativas sobre

prevención de riesgos laborales, todo ello como vía óptima de sensibilización de los trabajadores autónomos en esta materia.

- 5. Continuar incentivando la adopción Planes de Igualdad en las empresas** que incluyan nuevas formas de organización del trabajo y adaptación del tiempo del mismo a las necesidades de la vida personal y familiar. Y, en relación con ello, promover el uso del **distintivo Igualdad en la Empresa en el tráfico empresarial y comercial**, para reconocer y estimular la labor de las empresas especialmente comprometidas con la igualdad.
- 6. . Evaluar junto con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, el estado de la negociación colectiva en materia de igualdad así como la propuesta de medidas que, en función de la evolución analizada, resulten en cada caso pertinentes.**
- 7. Seguir impulsando programas y medidas específicas para favorecer el emprendimiento femenino**, fundamentalmente en sectores científicos y tecnológicos emergentes de alta empleabilidad, que contribuyan a eliminar la segregación horizontal del mercado laboral y las barreras que lastran la capacidad emprendedora de las mujeres.

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

77



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N°

RACISMO Y XENOFOBIA

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando y fortaleciendo las medidas encaminadas a preservar la cohesión social, con actuaciones encaminada a prever y combatir el racismo y la xenofobia. En concreto, a desarrollar y poner en marcha en su totalidad **la Estrategia Nacional e Integral de lucha contra el racismo y la xenofobia**”

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

INDUSTRIA

1. Hacer efectivas, con el ritmo y la intensidad que demanda el actual momento de recuperación, las medidas previstas en el Plan de Acción 2011-2015 incluido en el Plan Integral de Política Industrial 2020, con objeto de acelerar la modernización del modelo de crecimiento, aumentando el peso relativo del sector industrial en la actividad económica, incrementando la competitividad de las empresas que lo componen y alineando la política industrial española con la europea.

2. Evaluar y potenciar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de nuestros sectores estratégicos industriales y a preservarlos de los efectos de la crisis económica y financiera, fomentando, a un tiempo, la consolidación de un nuevo modelo de crecimiento, competitivo y sostenible, mediante la puesta a disposición de las empresas de ayudas destinadas a impulsar actividades industriales de elevado valor añadido, prestando una especial atención al sector automovilístico.

3. Fomentar la demanda de vehículos eléctricos, favorecer su industrialización en España, a través del establecimiento de acciones concretas para atraer inversiones en este ámbito, e impulsar los aspectos normativos y reglamentarios relacionados con la seguridad vial y las infraestructuras de recarga.

Impulsar el desarrollo de tecnología propia y la fabricación de baterías, elemento central en el desarrollo del vehículo eléctrico, como oportunidad estratégica de posicionamiento en el ámbito del vehículo eléctrico.

4. Facilitar el acceso de la PYME a la contratación pública, reducir las insuficiencias del mercado español de capital riesgo en las fases de semilla y arranque a través de fórmulas de financiación intermedias, como los préstamos participativos, promover el acceso de las PYMES a instrumentos y mercados de financiación alternativos a los tradicionales, promocionar el sistema de garantías y avales para las PYMES, promover actuaciones de cooperación entre centros que prestan servicios de apoyo a los emprendedores para complementar y mejorar la oferta y la calidad de los mismos, fomentar en la PYME el conocimiento y la utilización de los derechos de propiedad industrial

como una manera de potenciar su capacidad innovadora y potenciar la creación de empresas por jóvenes.

ENERGÍA

1. Instar al Gobierno a introducir cambios en la normativa que regula las condiciones administrativas y técnicas de conexión a la red de baja y media potencia de las instalaciones de energías renovables y cogeneración de poca potencia de forma que se facilite el desarrollo de estas instalaciones.
2. Aprobar un nuevo Plan de Acción 2011-2020 que defina los mecanismos y estrategias que permitan alcanzar objetivos de ahorro de energía y eficiencia energética que, considerando el mix energético nacional, reduzcan la dependencia energética nacional.
3. Elaborar, con la participación de las Comunidades Autónomas, un Plan de Energías Renovables para el periodo 2011-2020 y una Planificación Energética 2012-2020, que aporte mayor seguridad al sistema energético nacional.
4. Introducir en la normativa energética las disposiciones que supongan incrementar la protección de los consumidores de acuerdo con lo establecido en las Directivas sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad y del gas con el objetivo de dinamizar el mercado minorista, evitando bloqueos en los procesos de cambio de suministrador, facilitando a los clientes el acceso a sus datos de consumo y evitando discriminaciones entre tipos de consumidores.

TURISMO

1. Continuar impulsando la ejecución del Plan del Turismo Español Horizonte 2020, aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre de 2007 y cuyo objetivo es la conversión del sistema turístico español en el más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar social.
2. Continuar impulsando la renovación de las infraestructuras turísticas mediante el Plan FuturE 2011, en colaboración con el ICO, para facilitar el acceso al crédito por parte de las empresas turísticas, en particular las PYMES, y permitir una modernización de nuestra oferta turística mediante inversiones que favorezcan la sostenibilidad, la accesibilidad, la eficiencia energética o el empleo de las nuevas tecnologías.

3. Favorecer la renovación de nuestros destinos turísticos consolidados mediante la ejecución de los Planes de Recualificación de Destinos Turísticos Maduros. En particular, se insta al Gobierno a continuar impulsando las actuaciones en el marco de los Planes puestos en marcha en Playa de Palma (Baleares), Costa del Sol (Andalucía) San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Puerto de la Cruz (Tenerife).

4. Luchar contra la desestacionalización de la demanda turística, impulsando el turismo social mediante el programa Turismo Senior Europa.

5. Continuar fomentando el conocimiento y la innovación en el sector turístico a través de la Red de Innovación e Inteligencia Turística, Intelitur, liderada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior, con el fin de organizar el conocimiento existente sobre el sector turístico y potenciar la innovación y la transferencia tecnológica hacia las empresas y administraciones turísticas, facilitando la adaptación de la oferta a los nuevos retos que plantea el entorno.

6. Seguir avanzando en la elaboración y puesta en marcha del nuevo Plan de marketing turístico de España, en colaboración con el sector y las CCAA, que definirá las políticas de Producto y Comunicación de los próximos años. El Plan de Marketing, elaborado desde un enfoque participativo, contribuirá a la sostenibilidad, calidad, diferenciación, diversificación, innovación y rentabilidad de nuestra oferta. El Plan se centrará en 5 grandes áreas, clave para la competitividad del turismo español: producto y experiencias, marca, recomendación y retención de clientes, expansión del *market space* (de ámbito de acción del marketing) y marketing online.

7. Instar a todas las fuerzas políticas y a las administraciones públicas a nivel nacional, autonómico y local, a procurar una política turística que siga como principios de trabajo y líneas maestras las del "Plan Turismo Litoral Siglo XXI":

a) La inversión en el reposicionamiento integral de la oferta turística española, en base a líneas de producto de mayor valor añadido, diferenciación y capacidad destacionalizadora.

b) El impulso de la rehabilitación y valorización sistémica del litoral (espacios públicos, edificaciones residenciales, instalaciones turísticas, sistemas naturales, patrimonio cultural, paisaje, etc.), encaminada a dotar de calidad integral a los espacios ya construidos.

c) El compromiso de dinamizar un turismo sostenible medioambientalmente, de forma que contribuya a la reducción de la carga ecológica, que incorpore, entre otros, los retos derivados de la mitigación y la adaptación al cambio climático y apostando por maximizar la eficiencia energética.

d) El fomento de un entorno de mayor calidad de vida para las sociedades locales, sostenido en el mayor y mejor empleo, la renovación de espacios y equipamientos públicos y la generación de un conocimiento enriquecedor de la cultura y el bienestar, que ejerza de tractor del talento.

e) Un nuevo sistema de liderazgo y gobernanza que involucre, al máximo nivel, a las distintas administraciones con el sector, que permita la participación de la sociedad civil y que diseñe el marco organizativo, normativo y financiero que haga posible el desarrollo del Plan, garantizando su viabilidad político-económica a largo plazo.

8. Continuar con el esfuerzo iniciado en la apertura a nuevos mercados emisores con especial prioridad en el mercado asiático, buscando un perfil de cliente de clase media alta, con elevada capacidad de gasto y que suele viajar en nuestras temporadas medias y bajas. Se está haciendo especial hincapié en el mercado Chino y en este sentido instamos al Gobierno a seguir trabajando en un Plan China con el objetivo ambicioso de alcanzar un crecimiento del 20% anual en la llegada de turistas chinos a España.

PROPUESTA DE RESOLUCION

SOBRE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Las Infraestructuras del transporte son elementos esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos y para el crecimiento económico.

La elevada inversión llevada a cabo a lo largo de los últimos años, ha hecho posible que, a día de hoy, España se haya convertido en un país líder en Europa en kilómetros de alta velocidad, en vías de alta capacidad, así como en la calidad de nuestras redes portuarias y aeroportuarias.

Y es ahora, tras alcanzar un alto grado de desarrollo en nuestra red de infraestructuras, cuando se hace más necesario un nuevo enfoque en las prioridades, guiando la política hacia una mejora continua de la calidad del sistema de transportes, mediante una gestión más eficiente del conjunto de la red, que asegure, a su vez, su sostenibilidad económica y medioambiental.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, debemos continuar avanzando en las reformas estructurales emprendidas en todos los modos de la red de transporte, que permitan una mayor adecuación del conjunto del sistema de transportes a las necesidades de competitividad de nuestra economía y a las necesidades de movilidad de los ciudadanos.

Por todo ello, y como consecuencia del Debate sobre el Estado de la Nación, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Potenciar los modos de transporte más sostenibles, especialmente el ferrocarril, en su triple vertiente, Alta Velocidad, Cercanías y Mercancías; así como la ejecución de actuaciones específicas que contribuyan más a la competitividad de la economía.
2. Convertir a España en una plataforma logística intercontinental, a través de la articulación de una red intermodal, en la que tenga cada vez mayor protagonismo el transporte de mercancías por ferrocarril y su conexión con los puertos.
3. Afianzar el liderazgo mundial de nuestra industria turística mediante la mejora de la competitividad de los servicios de transporte aéreo, especialmente con la finalización de la reforma de los servicios de tránsito aéreo y con la consolidación del nuevo modelo de gestión aeroportuaria.
4. Seguir desarrollando los planes de eficiencia y austeridad, que permitan un mayor ahorro energético y una racionalización de los recursos en el ámbito del transporte y la vivienda.

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

80



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

I+D

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación contemplada en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que implante un nuevo modelo de asignación de recursos más eficiente, flexible y transparente, que garantice un marco estable de financiación y que permita la incorporación de las mejores prácticas internacionales en materia de fomento y evaluación de la investigación científica y técnica.
2. Aprobar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología contemplada en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, como nuevo instrumento de gobernanza que permita fijar las líneas generales de actuación que deberán guiar la planificación a medio plazo de cada una de las Administraciones con competencias en materia de investigación y desarrollo, sobre la base de los principios de coordinación y eficiencia.
3. Apoyar singularmente a los centros de investigación de mayor excelencia para mejorar su competitividad nacional e internacional poniendo en marcha un nuevo enfoque de financiación de largo plazo, basado en un proceso de evaluación internacional que considere la fortaleza de las instituciones y su capacidad de atraer talento, y que garantice una adecuada rendición de cuentas.
4. Elaborar el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica que desarrolle los objetivos y las prioridades científico-técnicas y sociales de la Administración General del Estado, en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, y en coordinación con los departamentos ministeriales competentes.
5. Priorizar la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado e impulsar la aplicación de los nuevos instrumentos creados por las Leyes de Economía Sostenible y de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con vistas a mejorar la posición competitiva del sistema productivo español, logrando un crecimiento inteligente y sostenible, basado en el conocimiento y la innovación.

6. Elaborar un Mapa de Compra Pública Innovadora por parte de la Administración General del Estado, creando los instrumentos de reserva presupuestaria que resulten pertinentes y permitan al sector privado identificar futuras necesidades y plantear la estrategia tecnológica necesaria para participar en las licitaciones. Simultáneamente, trasladar este plan de Compra Pública Innovadora al debate del Consejo de Política Científica Tecnológica e Innovación, para que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar, en el ámbito de sus competencias, una fórmula similar.
7. Elaborar el Estatuto de la Joven Empresa Innovadora contemplado en la Ley de la Ciencia, la Tecnología, que ayude a las nuevas empresas tecnológicas a tomar tamaño y dimensión mediante diversos tipos de incentivos.
8. Impulsar las medidas necesarias para seguir incrementando y la participación de entidades españolas en el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, potenciando así los retornos tecnológicos de financiación a nuestro país.

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

81



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº

ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN

2011 está siendo un año importante, tanto desde el punto de vista de la situación económica global, como en términos de saber adaptarnos y aprovechar las oportunidades que nos ofrece un mundo en permanente cambio. En este contexto, es preciso intensificar todos los mecanismos de diplomacia económica para poner en valor en el exterior el verdadero peso de España, de nuestras empresas, de nuestra cultura, de nuestra sociedad civil.

Desde el punto de vista de la política exterior, ya no es suficiente con reforzar nuestras relaciones de vecindad con los países de las áreas geográficas prioritarias. Tenemos también que saber dar respuesta a cuestiones globales y, por tanto, proseguir en la tarea de contribuir a la creación de mecanismos eficaces de gobernanza global. En este sentido, nuestro compromiso con el multilateralismo, la paz, la lucha contra el hambre y la pobreza y la defensa de los derechos humanos, es también, fundamental.

Por otro lado, en la región del Mediterráneo, se están produciendo acontecimientos de gran trascendencia que están transformando el paisaje social y político de varios países, desde el Magreb hasta Oriente Próximo. Se trata de un área estratégica y prioritaria para España y, por tanto, debemos saber adaptar nuestra política exterior a este nuevo escenario.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desde el punto de vista de la diplomacia económica y cultural:
 - a) Seguir reforzando nuestras relaciones políticas y económicas en áreas tradicionalmente preferentes para nuestra política exterior, como Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo.
 - b) Dedicar una atención muy particular a países como Rusia, China e India, así como a otras economías emergentes de la cuenca del Pacífico, Asia Central, el Golfo Pérsico y África.
 - c) Dar un nuevo impulso a la labor que desarrollan las Fundaciones Consejo que España tiene constituidas, así como a otras iniciativas de la sociedad civil que tienen por objetivo, también, impulsar conjuntamente la cooperación comercial, empresarial, científica y cultural.

- d) Desarrollar el Plan de Acción Cultural en el Exterior a través de la elaboración de estrategias regionales y sectoriales y reforzando la coordinación de los agentes implicados.

2. En el contexto de las prioridades de la nueva agenda global:

- a) Reafirmar el impulso político para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente la lucha por hacer efectivo el derecho a la alimentación, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático, en el año clave para la preparación de la Cumbre de Río+20 en 2012, manteniendo, para ello, un esfuerzo financiero significativo e incentivando la movilización de otros recursos para el desarrollo.
- b) Impulsar la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo en el plano bilateral y multilateral, especialmente, mediante la acción en Naciones Unidas.
- c) Promover y acompañar los procesos de integración regional, especialmente los procesos iniciados en América Latina y África Occidental, así como impulsar los procesos negociadores actualmente abiertos entre la UE y América Latina, además de asegurar la consolidación del espacio iberoamericano y el significativo acervo que se ha venido construyendo desde la primera Cumbre Iberoamericana, cuyo vigésimo aniversario celebramos en 2011.
- d) Fortalecer el papel de la ciencia y de la innovación en la lucha contra la pobreza, especialmente en los sectores estratégicos de salud y de energía como ejes clave para el desarrollo de los países.

3. Ante los cambios que se están produciendo en la región del Mediterráneo:

- a) Apoyar con determinación y con respeto los cambios y las reformas democráticas en el mundo árabe y promover una política de acompañamiento, ofreciendo asesoramiento y asistencia cuando se nos demande.
- b) Reafirmar el compromiso con la población civil que está sufriendo las consecuencias de los conflictos abiertos en la región, mediante ayuda humanitaria en coordinación con la UE y NNUU.
- c) Reorientar la Cooperación Española con la región hacia el apoyo a las redes de la sociedad civil, el fortalecimiento institucional para la

transición hacia la democracia y la defensa de la igualdad de género, contribuyendo a la movilización de recursos financieros y económicos que permitan a estos países llevar a cabo las reformas políticas y económicas necesarias.

- d) Adaptar los instrumentos e iniciativas ya existentes en el marco de la Política Europea de Vecindad y de la Unión por el Mediterráneo con el objetivo de promover una relación cada vez más estrecha con la Unión Europea, que favorezca las reformas democráticas, el impulso económico y esas nuevas expectativas sociales.

4. Hacer un balance del grado de desarrollo y cumplimiento del Plan de Derechos Humanos, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2008 y, sobre esta base, impulsar de forma inmediata los trabajos necesarios para elaborar un II Plan de Derechos Humanos que asegure su continuidad como garantía de que tales derechos se respetan y cumplen en todos los ámbitos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

SOBRE POLÍTICA DE VIVIENDA.

Desde el inicio de la crisis el Gobierno está trabajando para acelerar la recuperación económica y transformar nuestro patrón de crecimiento, adoptando las medidas de carácter social más adecuadas para cada una de sus fases. Entre ellas, figuran precisamente las dirigidas a paliar los efectos de la burbuja inmobiliaria, destinadas a proteger a las personas más vulnerables.

Para muchas personas la vivienda es la inversión patrimonial más importante que llevan a cabo a lo largo de su vida, lo que precisa, además de una decisión meditada y profesionalmente evaluada, de amplios periodos de endeudamiento en los cuales las circunstancias pueden alterar de forma importante la capacidad de muchos ciudadanos de hacer frente a las obligaciones contraídas de buena fe. Los poderes públicos deben promover medidas que prevean este tipo de circunstancias atendiendo, por un lado, a que la vivienda es un bien fundamental para el desarrollo de los proyectos vitales de las personas y a que su pérdida sitúa a algunos ciudadanos en situaciones de riesgo de exclusión social.

Por todo ello el Congreso insta al Gobierno a:

- adoptar medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor hipotecario o de malbaratamiento de los bienes.
- reforzar la protección de los deudores hipotecarios, garantizando que en los casos en que la deuda no se ve liquidada por la ejecución hipotecaria, las condiciones de satisfacción de la deuda tengan en cuenta la situación económica del deudor y su familia, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y, adicionalmente, por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios.
- mantener la solvencia general del sistema hipotecario español, evitando reformas indiscriminadas que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.
- impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la Subcomisión de Análisis y posible reforma del Sistema Hipotecario español, recientemente constituida en el Congreso, especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar en casos extremos y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias del deudor y su excepcionalidad.
- potenciar el mercado de alquiler y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, especialmente a los más desprotegidos

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

83



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)

La creación de un impuesto sobre transacciones financieras (ITF) a escala europea o global contribuiría de manera clara a reducir las prácticas de negociación financiera altamente perjudiciales en los mercados como las estrategias a corto plazo o a descubierto y la negociación automatizada de alta frecuencia, así como a frenar la especulación.

Así mismo, un ITF podría mejorar la eficacia los mercados financieros, aumentar la transparencia, reducir la volatilidad y crear incentivos para que el sector financiero invirtiera a largo plazo en proyectos que generaran valor añadido para la economía real. También contribuiría a financiar bienes públicos y a reducir los déficits públicos.

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han calculado los ingresos que podrían derivarse de un ITF con un tipo reducido, que dada su amplia base imponible, podría generar ingresos cercanos a los 200.000 millones de euros anuales en la Unión Europea y a los 650.000 millones de dólares a nivel mundial, volúmenes que podrían constituir una contribución sustancial del sector financiero a la asunción de los costes de la crisis y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La creación de un ITF debe impulsarse a escala europea y global. Por ello, es necesario impulsar con determinación tanto desde nuestro país como a escala europea desde la UE la creación de un ITF en foros globales como el G-20.

La UE debe promover la introducción de un ITF a escala mundial y, en cualquier caso, hacerlo a escala europea como primer paso teniendo en cuenta que en el marco europeo los mecanismos de compensación y liquidación existentes podrían facilitar la introducción de un ITF asegurando que fuera administrativamente barato y de fácil aplicación. En cualquier caso siempre deba tenerse en cuenta la naturaleza mundial e interconectada del sector financiero al determinar los aspectos técnicos del ITF.

Así mismo, como demuestran los estudios realizados, cualquier vía de creación de un ITF deberá garantizar que no sean los consumidores, esto es, los pequeños inversores y los particulares quienes paguen finalmente el impuesto.

Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid



“Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a coordinarse adecuadamente con la comunidad internacional impulsando un análisis de los efectos que desplegaría el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras, la fijación de un calendario adecuado de trabajo en este sentido, así como el establecimiento de un conjunto de medidas que disuada a los inversores financieros de realizar operaciones únicamente especulativas, favoreciéndose la transparencia y el control de las mismas.”

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

**PARA EL IMPULSO DE LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL**

La agricultura y ganadería son actividades estratégicas para la economía española, conformando un sector que impulsa la industria agroalimentaria como primera industria manufacturera de España. Es uno de los sectores más dinámicos, tanto en volumen de negocio como por su presencia en los mercados internacionales y posibilita, además, la gestión del territorio y la creación de empleo en el medio rural.

Este desarrollo y dinamismo ha sido posible por el esfuerzo de trabajadores y empresarios y por las políticas dirigidas tanto a la incorporación de nuevas técnicas de producción, como a la realización de las infraestructuras necesarias para dotar de los recursos hídricos necesarios para su funcionamiento.

En el contexto actual de revisión de la Política Agraria Común de la Unión Europea se hace necesario redoblar el esfuerzo de apoyo a este sector estratégico para la economía española, productor de alimentos sanos, de calidad, además de contribuir a un desarrollo sostenible y favorecer la conservación y protección de nuestro medioambiente.

Por otra parte, y de forma complementaria, las políticas de desarrollo rural inscritas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible aprobado por el RD 752/2010, de 4 de junio, con el consenso de las 17 comunidades autónomas, prevén actuaciones sobre el medio rural con el fin de superar el déficit económico y social que aún presenta.

Por todo ello será necesario, dentro del debate de la UE sobre el Marco Financiero Plurianual, potenciar la defensa de una política agraria fuerte, con

una dotación presupuestaria que permita mantener lo realizado y potenciar su futuro mediante una clara apuesta por el sector.

En consecuencia, se insta al Gobierno de la Nación a:

1. Reforzar la capacidad de exportación del sector agroalimentario en sus destinos tradicionales y fomentar la apertura de nuevos mercados.
2. Seguir potenciando la capacidad innovadora, de investigación y formación del sector agroalimentario, en toda la cadena productiva, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y procesos.
3. Impulsar los convenios de colaboración previstos para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en todas las Comunidades Autónomas implicadas.
4. Garantizar que los Planes de Zona sean elaborados a través de los procesos de participación y aseguren una información suficiente, real y efectiva. Verificar así mismo que las actuaciones son diseñadas de forma singularizada, en función de las características, necesidades y potencialidades territoriales.
5. Establecer los mecanismos para que los Departamentos Ministeriales con actuaciones susceptibles de ser demandadas desde los Planes de Zona, y dentro de las disponibilidades presupuestarias, atiendan el mayor número posible de estas actuaciones, y adapten las bases reguladoras referidas a subvenciones u otras actuaciones a las determinaciones del Programa.
6. Mantener en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, una previsión económica adecuada a las cuantías previstas para atender al Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

85



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar el Proyecto de Ley de transparencia y acceso a la información pública.
2. Impulsar una estrategia de Gobierno Abierto en la Administración General del Estado, que incluya:
 - a. Medidas que propicien la publicación de información y datos que maneja el sector público para el ejercicio de sus competencias, para uso y reutilización libre por parte de la sociedad.
 - b. La creación de canales de interacción con los ciudadanos en los que éstos puedan opinar, instar, solicitar, aportar, colaborar y, en definitiva, interaccionar con el sector público con el fin de mejorar el conocimiento mutuo y para impulsar la participación y colaboración ciudadanas.

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

86



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar y presentar, en los próximos seis meses, un libro blanco de la coordinación sociosanitaria, que analice la situación en España, a nivel estatal y territorial, de la colaboración entre los servicios sociales y sanitarios, formulando, sobre la base de las experiencias llevadas a cabo, aquellas recomendaciones que permitan establecer su implantación estratégica.
2. Concluir, en los próximos seis meses, el *Libro Blanco del Envejecimiento Activo*, a fin de disponer de un diagnóstico sobre las repercusiones del envejecimiento en España y sobre la situación de las personas mayores y que, además, establezca propuestas concretas para promocionar la salud y los estilos de vida saludables, prevenir las enfermedades y trastornos que producen dependencia e impulsar la plena participación de las personas mayores.
3. Promover un acuerdo político y social, con participación de las distintas Administraciones Públicas y de los agentes sociales y económicos, en torno a la evaluación y resultados de la Ley para la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, que permita proponer las modificaciones en la implantación del sistema que aseguren su aplicación y desarrollo progresivo, su sostenibilidad y su suficiencia para atender las situaciones de dependencia.
4. Mejorar la protección de los consumidores en materia de comercio electrónico, mediante el desarrollo de un Plan estratégico de protección, que incluya la creación de una unidad específica en el Instituto Nacional de Consumo y la colaboración entre los distintos departamentos ministeriales implicados; especialmente Sanidad, Política Social e Igualdad, Industria, Turismo y Comercio, Interior y Justicia.

5. Mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad, tanto como usuarios como creadores, a los espacios y actividades culturales, mediante el establecimiento de una Estrategia Integral de Cultura para todos, en la que se potencien criterios de calidad, tecnología y adaptabilidad, que faciliten el acceso a los productos, edificios y entornos físicos o virtuales de carácter cultural.
6. Se promoverá la inclusividad en todos los juguetes para garantizar su uso por los niños y niñas con capacidades diferenciadas mediante acuerdos voluntarios entre los fabricantes y distribuidores de juguetes, así como con las asociaciones del tercer sector y las administraciones públicas. En concreto, antes de un año, en el contexto de tales acuerdos voluntarios, se adoptará un código de iconos unificado de fácil comprensión para facilitar a las familias y los menores la selección de los juguetes que más se adapten a sus necesidades de acuerdo con su diversidad funcional. Estos iconos se referirán al menos a las características preferentes de cada juego y se incorporarán a los folletos y publicaciones publicitarias de ofertas de juguetes, en el etiquetado de los juguetes, así como en las campañas publicitarias de televisión.
7. Elaborar, en el marco de la Estrategia Europea 2020, un nuevo Plan Nacional de Inclusión Social en el segundo semestre de 2011, que tenga en cuenta la evaluación y resultados del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008 – 2010, y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Reformas.

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

87



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA.

La modernización de la Justicia es una reforma necesaria para dinamizar la economía y fortalecer un nuevo modelo social. El proceso de cambio supone la transformación de distintos elementos del sistema de justicia a fin de acercarlo al ciudadano, convirtiéndolo en un servicio público, accesible, eficaz y previsible.

Con el fin de seguir avanzando y profundizando en el proceso de modernización ya iniciado, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar de manera decidida con el altísimo grado de ejecución de los principales proyectos de transformación de la Administración de Justicia programados en el Plan Estratégico de Modernización y, en concreto a:

- a) Consolidar el proceso de progresiva implantación de la nueva oficina judicial y extender su despliegue junto con las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia.
- b) Avanzar en una ordenación más racional, eficiente y moderna de nuestra planta judicial, presentando, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley para crear tribunales de instancia, de conformidad con lo señalado en el Informe de la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
- c) Apostar por las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la Administración de Justicia consensuando con las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial todas aquellas medidas organizativas pertinentes para el cumplimiento de la Ley reguladora de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia y así:
 - Generalizar el proyecto de expediente judicial electrónico a todos los órganos judiciales y fiscalías.
 - ampliar a todos los órganos judiciales la aplicación del portal de subastas judiciales de inmuebles para mejorar la transparencia y eficacia
 - y, en el ámbito de sus competencias, ampliar los trámites que al ciudadanía puede realizar a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia y en especial aquellos relativos al Registro Civil

- d) Seguir trabajando en un modelo de justicia interconectada, promoviendo aplicaciones informáticas y de comunicación que garantice la interoperabilidad de todos los actores del sistema de justicia. Avanzar, asimismo, en el desarrollo del Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial y seguir impulsando e-Justice en el seno de la Unión Europea, particularmente, el de la apostilla electrónica.
- e) Adecuar la normativa, sobre todo registral, a las innovaciones recientemente introducidas en el régimen de las sociedades de capital reforzando su eficiencia en el sistema económico
- f) Continuar protegiendo a las víctimas y garantizando sus derechos, impulsando la regulación legal de un nuevo modelo de proceso penal.
- g) Adoptar las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para promover la cooperación jurídica internacional, especialmente en materia civil, y ello con el objetivo de mejorar cuestiones como la ejecución de sentencias firmes, la notificación, el traslado y el reconocimiento de documentos judiciales y extrajudiciales o la obtención de pruebas en el extranjero.

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

88



Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

CONSOLIDACIÓN FISCAL Y MEDIDAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Continuar con el proceso de reforma para impulsar la recuperación y creación de empleo mediante la consolidación fiscal y la consecución de un programa de reformas estructurales que fomenten un crecimiento sostenido, estable y equilibrado.”

En este sentido se insta al Gobierno a:

I. Consolidación fiscal

Continuar con el proceso de consolidación fiscal que ha permitido cumplir las previsiones para 2010, a la vez que se mejoraba la transparencia de la información presupuestaria a nivel de las Comunidades Autónomas y se incrementaba el control del cumplimiento de sus objetivos de déficit. A fin de incrementar la eficacia de este proceso, el Gobierno trabajará para mejorar las normas para la consolidación de las cuentas del sector público.

Mantener el compromiso de reducción del déficit al 3% en 2013 con los objetivos intermedios del 6% en 2011 y del 4,4% en 2012, reforzando la estabilidad presupuestaria y fortaleciendo también la vertiente preventiva de la política fiscal. En este sentido se establecerá una regla de gasto que atienda al crecimiento del PIB nominal en el medio plazo de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado y las Entidades Locales, y se promoverá un consenso para que se aplique igualmente en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

Cumplir los compromisos derivados del vigente acuerdo de financiación autonómico, particularmente los previstos en los artículos 19 y 24 y la disposición transitoria segunda de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, convocando a tal efecto los mecanismos bilaterales de negociación Estado-Comunidades Autónomas para acordar la concreción y aplicación de dichos compromisos.

Adoptar las medidas necesarias para continuar con la lucha contra el fraude fiscal.

II. Reformas estructurales.

Mantener el compromiso reformista en el mercado de productos y de factores, promoviendo la competencia, la competitividad y la mejora en el funcionamiento del sistema financiero y del mercado de trabajo y asegurando la contribución de un sistema educativo eficaz en la formación de capital humano.

En este sentido, se insta al Gobierno a:

- Continuar con su programa de eliminación de trabas administrativas y regulatorias que puedan frenar la actividad en los mercados, en particular, en las actividades de servicios, mediante la consolidación de las reformas ya en marcha, del progreso en el programa de reducción cargas administrativas y de la adopción de medidas de mejora de la normativa que hagan la regulación más eficiente y favorable a la actividad económica y el empleo siguiendo los principios marcados por la Ley de Economía Sostenible.
- Promover el conocimiento, la utilización y el despliegue de las medidas adoptadas en el mercado laboral, y en particular las referidas a la negociación colectiva, las políticas activas de empleo, la formación profesional y la regularización del empleo no declarado. Y en particular a aprobar la Estrategia Española de Empleo y la normativa para mejorar el acceso al sistema de formación profesional.

III. Medidas en el sector financiero.

- Completar el proceso de recapitalización y reestructuración de las entidades de crédito para reforzar la solvencia del sector financiero de forma que se pueda garantizar su función de canalizar el crédito a la economía y, de este modo, contribuir a la recuperación económica y, en concreto, a culminar antes del 31 de marzo de 2012 el proceso de adaptación del sistema financiero a los requisitos reforzados de capitalización. Para respetar lo establecido en la Disposición transitoria primera. 4 del Real Decreto-ley 2/2011
- Facilitar dicho proceso utilizando el FROB como último recurso, cuando la recapitalización a través de captación de recursos de terceros o saliendo a bolsa no sea posible, con el objeto de minimizar el coste para los contribuyentes. El

apoyo financiero del FROB debe ser compatible con las normas de la UE y con el compromiso de reducir los costes estructurales, mejorar la gestión profesional y facilitar el flujo de crédito a PYMES y familias.

- Impulsar, a nivel nacional y comunitario, el desarrollo de un marco de supervisión financiera que refuerce la protección de los derechos de los consumidores.

- Continuar estableciendo medidas regulatorias a las agencias de rating en el marco de la UE, al objeto de garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.

- Seguir impulsando medidas que limiten, a través de los supervisores, las remuneraciones variables de miembros del consejo de administración y altos directivos de entidades cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital.

Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

89



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En relación con las últimas decisiones de las más altas instancias jurisdiccionales, el Congreso de los Diputados manifiesta el máximo respeto y acatamiento de todas las resoluciones judiciales, así como la obligación que a todos los poderes públicos corresponde de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes.

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

90

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formular la siguiente **Propuestas de Resolución** con motivo del **Debate de Política General en torno al Estado de la Nación**.

En el Palacio del Congreso de los Diputados a 29 de junio de 2011



EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA



EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA

El Gobierno español, en el marco del proceso de revisión de las Perspectivas Financieras de la Unión Europea, de reforma del sistema de recursos propios y de las reformas de las políticas de cohesión y agraria común, debería apoyarse en las siguientes ideas de actuación a la hora de definir la estrategia de negociación. Estas líneas de actuación deberán ser igualmente incorporadas por los Grupos Parlamentarios en sus respectivas estrategias negociadoras en el seno del Parlamento Europeo.

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Primera.- Asegurar que en las Perspectivas Financieras 2014-2020, la financiación de las nuevas competencias que asigna a la Unión Europea el Tratado de Lisboa y los proyectos y acciones que se deriven de la Estrategia 2020 se pongan en marcha, garantizando las políticas tradicionales reconocidas en los tratados, en especial la política agraria común o las políticas de cohesión. Es prioritario, además, conciliar la necesidad de ajuste presupuestario con la necesidad de dotar a la Unión Europea con los recursos suficientes para afrontar los retos futuros.

Segunda.- Abordar el debate y negociación sobre los ingresos y gastos del presupuesto europeo en paralelo, hasta alcanzar un acuerdo global.

SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS

Tercera.- Apoyar que la estructura de financiación del Presupuesto de la Unión Europea se sustente sobre los principios de equidad en los ingresos y transparencia defendiendo para ello un sistema de recursos basado, además de en los Recursos Propios Tradicionales, en la Renta Nacional Bruta, eliminando todas las compensaciones que los distorsionen.

POLÍTICAS DE COHESIÓN

Cuarta.- Negociar en materia de políticas de cohesión que se diseñen e introduzcan estrategias de salida graduales justas para aquellas regiones que deben abandonar el Objetivo de Convergencia por haber superado su renta per cápita el 75% de la media europea, determinando los periodos transitorios precisos para que no se produzcan cambios bruscos en la dotación financiera que reciben estas regiones de la política de cohesión, dándoles estabilidad financiera y permitiéndoles seguir convergiendo con las regiones más prosperas.

Quinta.- Negociar un tratamiento singular dentro de las políticas de cohesión para Canarias, como región ultraperiférica y para Ceuta y Melilla, como ciudades fronterizas alejadas, dada su especial singularidad.

Sexta.- Adaptar los criterios de reparto de los fondos de la política de cohesión en coherencia con los objetivos de la estrategia Europea 2020, dando más importancia al desempleo e introduciendo otros factores para el reparto de fondos tales como la brecha tecnológica, la innovación, los índices de abandono escolar o la tasa de población inmigrante de los distintos Estados y regiones.

Séptima.- Modular la distribución de recursos dentro del objetivo de competitividad teniendo en cuenta el distinto nivel de desarrollo de las regiones, estudiando la posibilidad de establecer tramos dentro del mismo objetivo de forma que, aun manteniendo la etiqueta colectiva de regiones de competitividad, haya distintos tipos y tratamientos de regiones dentro de este objetivo, lo que reflejará mejor la heterogeneidad existente entre las regiones y permitirá establecer un reparto de fondos más preciso.

Octava.- Defender la simplificación y flexibilización en la gestión de la futura política de cohesión, asegurando la eficacia en el modelo de gestión para aumentar al máximo posible la absorción de fondos. Por ello se debe plantear la continuidad del sistema actual, introduciendo las mejoras necesarias.

REFORMA DE LA PAC

Novena.- Defender que la Política Agraria Común (en adelante, PAC) no vea reducidas sus dotaciones presupuestarias actuales, ni se introduzcan elementos de renacionalización o cofinanciación en su primer pilar y conseguir que nuestro país siga percibiendo, como mínimo, los importes que actualmente viene recibiendo del presupuesto comunitario, del FEAGA y del FEADER, incluso si se operan eventuales procesos de redistribución interna del gasto agrario a favor de los doce nuevos Estados miembros.

Décima.- Evitar que el modelo de la Política Agraria Común resultante tenga unos mecanismos de aplicación que puedan originar una redistribución significativa dentro del Estado Español que pueda dar lugar a tensiones entre las distintas producciones agrarias y ganaderas y entre las comunidades Autónomas o llevar a pérdidas importantes de apoyo en cultivos determinados o determinadas producciones ganaderas que puedan poner en peligro su viabilidad, para lo cual, en su caso, habrá que negociar la introducción de mecanismos suficientes de flexibilidad nacional y autonómica para la aplicación de la PAC y la distribución de sus ayudas.

Undécima.- Impulsar que en la PAC reformada se incluyan medidas eficaces para reforzar el peso de los productores en la cadena alimentaria, incluyendo las necesarias modificaciones de la normativa reguladora de la competencia para tener en cuenta la singularidad y especificidad del sector agrario introduciendo excepciones que permitan una mejora efectiva de su capacidad de negociación. Así mismo promover que en la PAC reformada, se incluyan esquemas de apoyo específico para mejorar la capacidad empresarial y la competitividad de los agricultores, especialmente los titulares de pequeñas explotaciones.

Duodécima.- Establecer en la nueva PAC mecanismos eficaces de regulación de mercados, con dotación del 100% del presupuesto comunitario, que constituyan una

verdadera red de seguridad y de estabilización de precios en situaciones extremas de mercado, y den respuesta adecuada a los problemas de volatilidad de precios u otras crisis alimentarias.

Decimotercera.- Promover que los acuerdos de comercio que firme la Unión Europea con terceros países incluyan cláusulas que garanticen que las importaciones de productos agrícolas y ganaderos procedentes de estos países y que se comercialicen en la Unión Europea, respeten las mismas normas de seguridad alimentaria (límites máximos de residuos, ausencia de utilización de pesticidas prohibidos, etc.) que los productos europeos.

Decimocuarta.- Orientar los fondos de desarrollo rural prioritariamente a mejorar la eficacia, competitividad y productividad de las explotaciones agrarias y de la industria agroalimentaria, fomentar la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y en su acceso a la titularidad de los bienes agrícolas y, promover el rejuvenecimiento de las explotaciones.

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Decimoquinta.- Defender la necesidad de introducir en el presupuesto de la Unión Europea elementos que tengan en cuenta el esfuerzo realizado por los Estados para cerrar la denominada "brecha tecnológica".

Decimosexta.- Mantener en las nuevas Perspectivas Financieras el esfuerzo en la financiación de las políticas orientadas a la innovación e investigación dentro de la Unión Europea, clave para el éxito de la Estrategia 2020, potenciando sobre todo las líneas dedicadas a las PYMES en el VIII futuro Programa Marco y, en particular, en el Programa de Competitividad e Innovación.

PYMES

Decimoséptima.- Establecer dentro de las Perspectivas Financieras un instrumento específico dedicado a las PYMES que promueva su competitividad y apoye la estrategia de la Unión Europea a favor de las pequeñas empresas.

ESPACIO DE LIBERTAD Y JUSTICIA

Decimooctava.- Dotar adecuadamente en el marco de las nuevas perspectivas financieras los recursos necesarios para que continúe avanzando el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, a fin de reforzar el ejercicio de los derechos fundamentales y la atención a las víctimas, así como mejorar la seguridad a través de los mecanismos de cooperación judicial y armonización de legislaciones para la lucha contra el crimen organizado y transfronterizo. A tal fin convendrá reforzar y dotar suficientemente las capacidades de las agencias de política común de seguridad y defensa y de las agencias de cooperación policial y judicial en materia penal y específicamente FRONTEX y EUROJUST, como instrumentos fundamentales para alcanzar una política europea común de seguridad exterior y de cooperación judicial, mejorando asimismo la dotación y los instrumentos para la integración de la inmigración.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Decimonovena.- Asignar, en el marco de la Estrategia Europea 2020, mayor volumen de recursos a la formación y educación a largo plazo, especialmente para luchar contra el desempleo juvenil y de larga duración.”